

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y TRÁMITE DE DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA NÚMERO DEN-PP-001/07 PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA

A N T E C E D E N T E S

I.- En fecha veintitrés de febrero de dos mil siete, se presentó en la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral un escrito suscrito por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en el que manifestó lo siguiente:

**LIC. JORGE SANCHEZ (SIC) MORALES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E.**

RAFAEL GUZMÁN HERNÁNDEZ, promoviendo con el carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional personalidad debidamente acreditada ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Tulipanes 6104 de la Col. Bugambillas en esta Ciudad capital autorizando para que a mi nombre y representación las puedan recibir indistintamente los CC. José Roberto Orea Zárate, Iván Ricardo Peña Andrade y Amado Morales García comparezco para exponer:

Que vengo mediante el presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 fracciones XXII y XX, 42 fracción X del Código de Instituciones y Proceso Electorales del Estado de Puebla, a manifestar hechos y aportar elementos de prueba para una debida investigación que tan bien fuera solicitada por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla y establecer el total esclarecimiento de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a la gubernatura del Estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres durante del desarrollo del proceso ordinario 2004, que podrían ser constitutivas de algunas o alguna infracción a disposiciones el Código de la materia electoral local.

HECHOS

1.- Que en fecha 18 de septiembre del año 2006 durante la transmisión de Noticiero W Radio conducido por la periodista Carmen Aristegui, fue difundida una conversación al parecer sostenida por el Empresario Kamel Nacif en dónde se señala que se habrían aportada en especie más de 60 mil camisas a favor de la Campaña del entonces candidato a la gubernatura por el Estado de Puebla.

2.- Que este hecho tuvo repercusiones (sic) varios medios de comunicación local tal como se da cuenta con diversas notas periodísticas difundidas en medios

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

3.- Que el Partido Revolucionario Institucional presente (sic) su informe justificatorio sobre la aplicación de los recursos relativo a la obtención del voto del proceso electoral ordinario 2004, así también con los elementos informados y obtenidos por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos esta dictamino (sic) sin ninguna observación al Partido Revolucionario Institucional y este Consejo General aprobará, sin embargo en tales informes no aparece registrada ni informada, la donación o compra de tales camisetas sobre todo en el apartado de ingresos y egresos de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Puebla.

Se ofrecen como elementos de prueba e indicios de los probables hechos, los siguientes:

I.- TECNICA.- consistente en un audio casete que contiene la grabación en la cual se escuchan las voces de Kamel Nacif hablando con algún empleado sobre unas playeras que tiene y en que las van a ocupar. A continuación presentamos la versión estenografica de la conversación hecha pública.

KamelNacif: (kn) ¿Cuántas playeras tienes en crudelio?

Voz Empleado: (ve) en crudelio como 45 a perdón, pendejo estaba yo en (inaudible) de mariano, tengo como sesenta señor

(kn) ¿cuanto?

(ve) como sesenta mil camisetas

(kn) ¿aparte de las que te?

(ve) si, yo ya no cuento lo de los candidatos

(kn) sesenta mil de Marín, treinta mil de Marín sesenta mil de González ¿y te sobran otros sesenta mil?

(ve) Sip ,

(kn) ¿Sabes que?

(ve) ¿Dígame?

(kn) Necesitamos chingarnos esos sesenta mil para el cierre de campaña de Marín

II.- LA DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en la publicación de e-puebla.com o e-consulta con fecha del 21 de octubre de 2006 de una nota periodística titulada "Exhorta Congreso a IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT". En dónde se señala que durante la campaña como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales unos 1.5 millones fueron aportaciones en especie por Kamel Nacif Borge, lo cual viola el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Dicha publicación también señala que Nacif Borge apporto (sic) más de 100 mil playeras al candidato Marín Torres que superarían el millón de pesos.

El código (sic) de Instituciones y Proceso (sic) Electorales del Estado de Puebla señala que un particular tiene permitido aportar en especie hasta el 10 por ciento de las prerrogativas que el IEE entrega anualmente a los partidos políticos. En 2004, el organismo destino mas de 8.3 millones al PRI. Esto significa que lo aportado por Nacif Borge apenas debía rebasar los 800 mil pesos. Sin embargo su aportación se estima fue entre un millón y 1.5 millones.

Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria (sic) General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

III.- LA DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en impresión de nota periodística publicada en la página de internet de la Jornada de Oriente su dirección es www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.phpes de fecha 25 de octubre del año 2006, en donde en la nota periodística titulada "El IEE podría desechar la investigación sobre la donaciones de Kamel a Marín" escrita por Lesly Mellado May en la que hace constar que efectivamente en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación del Señor Kamel Nacif con uno de sus empleados donde hace constar que a través de una de sus empresas se aportaron o donaron más de sesenta mil camisas a favor del C. Mario Marín en su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional.

Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

IV.- DOCUMENTAL TECNICA.- Consistente en impresión de la nota periodística sin fecha de publicación del diario digital la Quinta Columna su dirección de internet es http://www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/política/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, en donde el periodista Efraín Núñez hace referencia en la nota titulada "Kamel Nacif apoyó campaña de Marín" de dos sendas grabaciones las cuales cito por ser relevantes, pues ahí se involucran nombres de personas que intervienen en la donación presumiblemente ilegal de más de 60 mil camisas de la empresa del Señor Kamel Nacif a la campaña del Partido Revolucionario Institucional específicamente de su candidato a la gubernatura del Estado el Señor Mario Plutarco Marín Torres y que constituyen verdaderos indicios para ampliar la investigación de tales hechos.

Para verificar la existencia de tal publicación solicitamos que la Secretaria (sic) General de este órgano electoral ingrese a la mencionada dirección y haga constar circunstanciadamente su existencia, como parte de hacerse llegar los elementos para la debida investigación e integración de la misma.

Grabación 1:

Sonido de marcado de teléfono

Kamel Nacif (KN): Ponme a Amin Farjat...

Inaudible

Farjat (F): Bueno.

KN: Que pasó

F: Que tal señor buenos días.

KN: ¿Cuántas camisetas tenemos en ...(Inaudible)

F: Como 45, a perdón (Inaudible) tenemos todavía como 60 señor.

KN: ¿Cuántas?

F: Como 60 mil camisetas

KN: A parte de las que te di.

F: Yo ya no cuento lo de los candidatos.

KN: Van 60 mil de Marín, 30 mil de Marín, 60 mil de Gonzáles y ¿te sobran otras 60 mil?

F: Si.

KN: ¿Sabes que?

F: Digame.

KN: Necesitamos chingarnos esas 60 mil para el cierre de campaña de Marín.

F: Entonces ahorita las voy a ordenar y las muevo el lunes al PRI.

KN:¿Eh?

F: Las muevo el lunes al PRI?

KN: No, no, no, pero creo que va a llevar otro tipo de logotipo.

F: ¿Me lo consigue usted o dígame a quien le llamo?

KN: Inaudible. "Promotor" (Inaudible). Bueno, ya les dije que te manden a ti el disquete.

F: Si señor, claro que si.

KN: Que fuera a ti directo, para que lo triangulan conmigo.

F: Si, adelante señor. (Inaudible.)

KN: No se si es ahora, es mañana, es al rato o es pasado.

Inaudible, y cuelgan.

Grabación 2:

En una segunda grabación un empleado de Kamel Nacif habla con Jorge Mendoza Velarde -entonces Secretario de Finanzas del PRI estatal- y actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas:

Empleado (E): Buenos días

Jorge Mendoza (JM): Que tal buenos días

E: ¿Cómo estás, bien?

JM: Bien, bien a tus órdenes buenos días.

E: Oye Jorge, estoy aquí con el señor Kamel, este, te dieron el recado ayer de que ya estaban listas (Inaudible)

JM: Inaudible.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

JM: ¿Cómo?

E: Le repite el nombre de Farjat varias veces y se lo deletrea. De parte del señor Kamel le dices. Te pones de acuerdo con él ¿no? Ahora te pones de acuerdo con él, el viernes me habló Mario Marín pidiéndole al señor Kamel de favor que le hiciera 100 mil camisetas más con el nuevo logo que dice "Adelante Promotor" y atrás "Mario Marín Gobernador", que tu tienes el dibujo y el disquete (Inaudible)

JM: (Inaudible) Después te lo hago llegar.

E: Sí.

JM: Comunícate con Valentín, él es el que tiene el logotipo (Inaudible)

E: Le hablas tú.

Inaudible

E: Permíteme un segundo.

V.- DOCUMENTALES PUBLICAS (sic).- consistentes en Copia Certificadas del informe justificatorio y sus anexos del Partido Revolucionario Institucional sobre los gastos para la obtención del voto de todas y cada una de sus candidaturas y en especial del Gobernador del Estado de Puebla del Proceso local ordinario 2004, copia de los informes y dictámenes emitidos por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Comisión de Revisora de la Aplicación del Financiamiento Público de los Partidos Políticos sobre el análisis y revisión del informe de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional relativo al Proceso Electoral Ordinario 2004, en el cual en ningún documento se desprende que se haya informado sobre los gastos u obtención de recursos mediante aportaciones en especie de más de 60 mil camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante su entonces Candidato a Gobernador del Estado Mario Plutarco Marín Torres a través de la empresa del señor Kamel Nacif Borges; todos estos documentos obran en el Archivo General a cargo de la Secretaria (sic) General del Instituto Electoral del Estado para lo cual deberá adjuntar el expediente las copias certificadas señaladas.

Entre otras cosas he de señalar que se ofrecen como prueba además las siguientes:

A) Copia Certificada de oficio no: IEE/DPPM/0457/04 signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación Amalia Oswelia Varela Serrano de fecha 09 de julio del año 2004, dirigido al Lic. Jorge Mendoza Velarde en su calidad de Secretario de Administración y Finanzas mediante el cuál (sic) se hace de su conocimiento sobre el límite anual de aportaciones en dinero de militantes y/o simpatizantes del periodo 01 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005) era de \$833,740.39 y el límite anual de aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ella en el mismo periodo fue de \$11,710.03, con lo cual acreditamos que si existe la persona de Jorge Mendoza a que hace referencia el señor Camel (sic) Nacif como Mario Marín, como un integrante y representante de las administración y finanzas de los recursos del partido revolucionario Institucional, además que le hace conocer los límites de las aportaciones que puede realizar cada militantes o simpatizante en una (sic) año aún Partido Político y se desprende que la aportación de las más de las sesenta mil camisetas podría haber rebasado el millón de pesos esto rebasaría por mucho los límites establecidos en ley e incluso si fue aportado a través de una empresa mercantil propiedad del Señor Kamel Nacif Borge y si no se informo sobre el origen y destino de todos los recursos empleados en campaña 2004, se estarían violando los artículos 49 fracción VII, 48, 52 apartado > B fracción III (sic) 54 fracción XI del Código de la Materia

B) Copia Certificadas de los formatos XVI XVII relativos al Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido revolucionario (sic) Institucional para el Proceso Electoral del año 2004 a nombre del candidato Mario Marín Torres, formatos en los cuales aparece la firma de Lic. Jorge Luis Mendoza Velarde (Secretario de Administración y Finanzas del CDE del Partido Revolucionario Institucional y Mario Plutarco Marín Torres candidato del mismo Partido en los cuales aparecen como aportaciones en efectivo la cantidad de 5,658,085.90 pesos y aportaciones de simpatizantes en efectivo y especie aparecen en ceros mientras que las aportaciones de militantes solo aparece en especie un informe de 158,551.76 pesos.

C) Copia certificada del informe DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05 emitido por la dirección de prerrogativas de partidos políticos y medios de comunicación (sic) del instituto electoral del estado (sic), relativo a los gastos de campaña del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL del proceso electoral estatal ordinario 2004 mediante el cual en el apartado IV en su punto 4 de los egresos señala que por gastos de propaganda el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL erogó la cantidad de \$4,879,133.85 (cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos con ochenta y cinco centavos) por gastos de propaganda en la cual dentro de la propaganda utilitaria por toda su campaña erogó la cantidad de \$1,609,315.50 (un millo (sic) ciento sesenta y nueve mil trescientos quince punto cincuenta pesos esto aunado al punto I de ingresos de financiamiento privado proveniente de militantes solo obtuvo la cantidad de \$874,736.78 (ocho cientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos con setenta y ocho centavos) bajo este concepto, así como también la no existencia de recibos de aportaciones en especie de militantes o simpatizantes de camisa nos lleva a tener claro que nunca informaron sobre la donación de las más de sesenta mil camisas pues es evidente que los hechos son coincidentes, la existencia de Jorge Mendoza como secretario de administración y finanzas del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL durante la campaña del licenciado (sic) Mario Marín, misma persona que recibió las camisas por parte del empleado del señor Kamel Nacif hechos que deberán de investigarse a luz de esto para saber la existencia o no de tal donación de camisas en forma ilícita.

Con lo cual se demuestra que no fueron registrado ni informados las aportaciones de las más de 60,000 camisetas, así como vuelve a coincidir el nombre del Sr. Jorge Mendoza Velarde y el candidato Mario Marín quienes según los datos obtenidos de las grabaciones pactaron la entrega de las camisetas con el Sr. Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad, es decir no se trata de reabrir el procedimiento de revisión del informe justificatorio, por el contrario lo informado y resuelto en el mismo

sirven de pruebas y lo que deberá investigarse la aportación de camisas y por consiguiente la ocultación de la misma.

Es por eso que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 42 fracción X, XI y 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, desde nuestro punto de vista la investigación deberá ser en el sentido de solicitar la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas para esclarecer los hechos y en su caso de existir alguna infracción imponer la sanción correspondiente.

1.- Revisar en los archivos del Instituto Electoral del Estado si el señor Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la Administración de los Recursos y acreditado ante el Instituto Electoral del Estado y adjuntar la copia certificada del nombramiento o en su caso solicitar al Partido Revolucionario Institucional informe al respecto.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.- Solicitar a la Vocalía Estatal del Registro Federal Electoral del Instituto Federal Electoral si existe algún registro a nombre del señor Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad, para ubicarles y en su momento se les solicite si desean colaborar con la investigación de los hechos.

4.- Solicitar la intervención del Sistema de Administración Tributaria y la Secretaria de Hacienda informe sobre las empresas propiedad o en las que aparezca como socio o representante legal del señor Kamel Nacif Borges e informe de sus actividades económicas en el periodo señalado en el punto dos, para esclarecer si existió alguna operación sobre un volumen de camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional o alguno de su funcionarios, así mismo si existen datos en el mismo sentido del señor Amin Farjat o Farjad.

5.- Se solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social si existe un registro patronal a nombre del señor Kamel Nacif Borges o Amil Farjat o Farjad o bien algún registro de alta como trabajador o empleado el señor Amin Farjat o Farjad y la empresa para la cual labora en su caso.

6.- Se solicite al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Puebla, sobre la existencia del Registro de Sociedades en dónde el señor Kamel Nacif sea socio (sic)

7.- Solicitar que a través de las Secretaria (sic) de Comunicaciones y Transportes tanto Federal como del Estado de Puebla, según corresponda o directamente informen los medios de comunicación W Radio, e-consulta, la Quinta Columna y La Jornada de Oriente, informe si cuentan con las grabaciones u otros elementos y que sea su deseo aportar a esta autoridad electoral, así como la forma en que los hayan obtenida, es especial las grabaciones que fueran difundidas durante los meses de septiembre y octubre del año 2006 y en especial sobre la información difundida en las notas periodísticas señalados en los puntos 1 de hechos, 2, 3 y 4 del apartado de pruebas e indicios del presente escrito.

De lo anterior permitirá a esta autoridad realizar investigación correspondiente y hacerse llegar de los elementos necesarios para estar en posibilidad de resolver los hechos que también hiciera del conocimiento de esta autoridad electoral la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla mediante su solicitud de exhorto para proceder a la investigación y que ahora esta representación con el ánimo de coadyuvar

se suma y hace suya a tal petición aportando más elementos e indicios de prueba para la realización de una investigación por presuntos actos cometidos por parte del Partido Revolucionario Institucional, y saber si estos incurrieron en la aceptación de recursos o apoyos económicos por alguna empresa mercantil, si este rebaso los límites de las aportaciones y si este oculto información sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados, es decir informar sobre todo los ingresos y egresos empleados en sus campañas electorales, que resulten por la presunta aportación de más de sesenta mil camisas a favor de su campaña a candidato a Gobernador del Estado de Puebla y con ello la presunta violación a las obligaciones que imponen a los partidos políticos contenidas en los 49 fracción VII, 48,52 apartado B fracción III, 54 fracción XI y demás relativos del Código de Instituciones y procedimientos (sic) Electorales del Estado de Puebla que tratan de regular la equidad en las campañas, la transparencia del manejo de recursos y la debida rendición de cuentas de los recursos con los que cuentan los partidos políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito:

Primero.- Tener por acreditada mi personería.

Segundo.- Recibir y dar trámite a la presente petición, en los términos planteados.

Tercero.- Realizar la investigación pertinente a la luz de los hechos e indicios arrojados por los elementos de prueba ofrecida, y con el objeto de esclarecer los hechos comprobar la presunta responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto.- Una vez comprobado la responsabilidad y la comisión de la infracción a las disposiciones del Código de la materia solicitamos se imponga la sanción que corresponda.”

En fecha veintiséis de febrero de dos mil siete, la Oficialía de Partes del Organismo remitió a la Presidencia de este Instituto Electoral, el escrito de referencia con sus respectivos anexos.

Atento a lo anterior, en fecha veintisiete de febrero de dos mil siete el Consejero Presidente envió a la Secretaría General de este Organismo Electoral el escrito de denuncia antes señalado con sus respectivos anexos, para la substanciación correspondiente.

II.- En sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado mediante el acuerdo número CG/AC-002/07 aprobó la creación de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias de este Organismo Electoral.

III.- En sesión ordinaria de fecha seis de marzo de dos mil siete, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias de este Organismo Electoral nombró a la Maestra en Derecho Rosalba Velázquez Peñarrieta y al Maestro José Joel Paredes Olguín, como Presidenta y Secretario de dicho Órgano Auxiliar del Consejo General, respectivamente.

IV.- En sesión ordinaria de fecha diecisiete de agosto del año dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó mediante el acuerdo CG/AC-073/07 el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado estableciéndose en la citada reglamentación las normas que regulan la presentación de las denuncias, así como el Órgano encargado de conocer y substanciar las mismas.

V.- En este sentido, en fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, la Secretaría General de este Instituto en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 8 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado tuvo por recibido el escrito de denuncia en mención, así como los anexos acompañados al mismo, otorgándole el número de expediente DEN-PP-001/07.

VI.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, la Secretaría General declaró procedente el escrito de denuncia presentado por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en atención a que el mismo cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 10 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, determinando en consecuencia correr traslado a la parte denunciada con el escrito de denuncia, así como con los documentos que fueron acompañados al mismo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho e interés conviniera apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo.

En cumplimiento al proveído antes señalado, el Secretario General de este Organismo Electoral mediante el oficio IEE/SG-1863/07 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete corrió traslado con el escrito de denuncia al representante propietario de la Coalición Unidos Para Ganar acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

VII.- Derivado de dicho emplazamiento, en fecha tres de septiembre de dos mil siete se presentó en la Secretaría General de este Instituto un escrito signado por el representante propietario de la Coalición Unidos Para Ganar acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado José Porfirio Alarcón Hernández, por el cual manifestó lo siguiente:

**"CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES
QUE INTEGRAN EL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DE PUEBLA
PRESENTES**

**PARA ATENCIÓN DE:
CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES
QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
PARA LA VIGILANCIA Y TRÁMITE
DE DENUNCIAS**

En atención a la vista que se me ha dado con el escrito de denuncia presentado por el representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el cual forma parte de la coalición que represento ante este órgano electoral, con fundamento en los derechos que derivan del texto de la fracción XI, del artículo 42 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los diversos 1, 6, fracción IV, 7, fracción III, 15, 16, 33, 34, y relativos del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o coaliciones acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, por este medio vengo a producir contestación, manifestando lo que a mi representación importa, lo cual sustancio en términos de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I.- Como se desprende del contenido del ocurso de denuncia descrito en el párrafo anterior:

1.- "Que en fecha 18 de septiembre del año 2006 durante la transmisión del Noticiero W Radio conducido por la periodista Carmen Aristegui, fué (sic) difundida una conversación al parecer sostenida por el Empresario Kamel Nacif en dónde se señala que se habrían aportada en especie más de 60 mil camisas a favor de la Campaña del entonces candidato a la gubernatura por el Estado de Puebla.

2.- Que este hecho tuvo repercusiones (sic) varios medios de comunicación local tal como se da cuenta con diversas notas periodísticas difundidas en medios electrónicos, como e-consulta, la quinta columna y la jornada de oriente en la cual difunden otras grabaciones en que señalan que tales aportaciones participo la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a través de su Secretario de Finanzas quién tuviera contacto con el empleado del señor Kamel Nacif un tal Amin Farjat o Amin Farjad, el propio Candidato y actual Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres y un tal Valentín quien pudiera haber sido un funcionario del Partido Revolucionario Institucional, también la existencia de un número telefónico 3622000 dónde contactarían al señor Amin Farjat para que este le entregará las camisetitas y que es necesario su investigación para el total esclarecimiento de tales hechos.

3.- Que el Partido Revolucionario Institucional presento (sic) su informe justificatorio sobre la aplicación de los recursos relativo a la obtención del voto del proceso electoral ordinario 2004, así también con los elementos informados y obtenidos por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos esta dictamino sin ninguna observación al Partido Revolucionario Institucional y este Consejo General aprobará, sin embargo en tales informes no aparece registrada ni informada la donación o compra de tales camisetitas sobre todo en el apartado de ingresos y egresos de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Puebla".

II.- Los pretendidos elementos de prueba e indicios de los hechos denunciados se hacen consistir en:

- a) **"Técnica.-** consistente en un audio casete que contiene la grabación en la cual se escuchan las voces de Kamel Nacif hablando con algún empleado sobre unas playeras que tiene y en que las van a ocupar. A continuación presentamos la versión estenografica de la conversación hecha pública".
- b) **Documental Técnica.-** Consistente en dos impresiones de notas periodísticas publicadas en sendas páginas de Internet, en las que se "difundió" y reseña la grabación de una "conversación del señor Kamel Nacif con uno de sus empleados donde hace constar que a través de una de sus empresas se aportaron o donaron más de 60 mil camisas a favor del C. Mario Marín en su calidad de candidato a la Gubernatura del estado de Puebla, por el Partido Revolucionario Institucional.
- c) **Documentales Públicas.-** Consistentes en Copia Certificadas del informe justificatorio y sus anexos del Partido Revolucionario Institucional sobre los gastos para lo obtención del voto de todas y cada una de sus candidaturas y en especial del Gobernador del Estado (sic) Puebla del Proceso local ordinario 2004, copia de los informes y dictámenes emitidos por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y de la Comisión de Revisora de la Aplicación del Financiamiento Público de los Partidos Políticos sobre el análisis y revisión del informe de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional relativo al Proceso Electoral Ordinario 2004, en el cual en ningún documento se desprende que se haya informado sobre los gastos u obtención de recursos mediante aportaciones en especie de más de 60 mil camisas a favor del Partido Revolucionario Institucional mediante su entonces Candidato a Gobernador del Estado Mario Plutarco Marín Torres a través de la empresa del señor Kamel Nacif Borges; todos estos documentos obran en el Archivo General a cargo de la Secretaria General del Instituto Electoral del Estado para lo cual deberá adjuntar el expediente las copias certificadas señaladas: así como tres documentos más cuya descripción consta en el propio documento de denuncia.

III.- En los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a la vista en las hojas 7 y 8 del escrito de denuncia, el denunciante indica que "La investigación deberá ser en el sentido de solicitar la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas para esclarecer los hechos y en su caso de existir alguna infracción imponer la sanción correspondiente".

CONSIDERACIONES

1ª.- Los apartados 9 y 10 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen, respectivamente:

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de las mismas y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. **Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio".**

2ª.- Como se desprende del propio curso de denuncia, los hechos que dan origen a esta provienen de una grabación de audio, de la cual no se mencionan los medios por los cuales fue obtenida, difundida en un programa noticioso, lo mismo que "se dá (sic)

cuenta con diversas notas periodísticas difundidas en medios electrónicos [...] en la cual difunden otras grabaciones en que señalan que tales aportaciones participó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional a través de su Secretario de Finanzas..."

A este respecto, ciudadanos consejeros, manifiesto que, aceptando sin conceder que las grabaciones mencionadas existan y su contenido sea real, el escrito de denuncia no menciona:

- a) Si alguna autoridad Judicial Federal a petición de la autoridad federal que faculte la Ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, autorizó la intervención de esta comunicación privada.
- b) Si la autoridad competente, por escrito, fundó y motivó las causas legales de la solicitud de intervención.
- c) Si la autoridad competente expresó, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

Atentos a lo anterior y ante la ausencia de Justificación de haber sido cubiertos los extremos constitucionales para "*intervenir una comunicación privada*", debe concluirse que la grabación del caso fue obtenida por medios ilícitos.

3ª.- Amparados plenamente por el texto de las disposiciones invocadas, de la Carta Magna, debe concluirse que:

- a) La grabación en cita proviene de una intervención no autorizada, por no ajustarse a los requisitos y límites previstos en las leyes, en consecuencia de lo cual, los resultados de esta intervención **carece de todo valor probatorio**.
- b) Conforme a las prevenciones contenidas en nuestra norma fundamental, "La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas" (comunicaciones), por lo que, desde este momento, manifiesto, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la coalición "Unidos para Ganar", reservamos el derecho de recurrir ante las instancias competentes, a efecto de que se indague el origen oscuro de la grabación multicitada, así como el responsable de la Comisión de tal conducta.

4ª.- Conforme a lo expuesto en el punto anterior, señores consejeros, la grabación de marras, no solo adolece de toda legitimidad, por su origen violatorio de normas constitucionales y, en consecuencia, carece de toda fuerza probatoria para fundar la causa que se intenta, así como para justificar los hechos denunciados, sino que, además, constituye un ilícito penal que debe ser perseguido por los órganos competentes para procurar justicia y, en su momento, ser consignado ante juez competente para imponer la sanción correspondiente, a quien resulte responsable del mismo.

5ª.- Atentos a todo lo anterior, señores consejeros, resulta ocioso e insustancial entrar al análisis de los medios de prueba y, en general, del contenido del documento de denuncia que motiva la presente instancia, toda vez que agrede flagrantemente los principios de legalidad y de certeza jurídica que rigen el desarrollo de todo proceso electoral sustanciado en un país en el que encuentra vigencia plena el Estado de Derecho.

En mérito de todo lo antes expuesto, a ustedes señores consejeros atenta y respetuosamente **PIDO** se sirvan:

PRIMERO.- A los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, tenerme por presentado con este escrito, dando contestación a la vista que se ordenó darme con el escrito de denuncia que motiva la presente instancia, expresando las consideraciones hechas al efecto.

SEGUNDO.- Recibir el expediente del caso, integrado por el señor Secretario General, del instituto y, en el momento procesal oportuno, elaborar el dictamen correspondiente, declarando absuelta a mi representado de las imputaciones hechas.

TERCERO.- A todos los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, emitir resolución aprobatoria del dictamen elaborado por los integrantes de la Comisión en cita, por el que se absuelve a mi representado, como integrante de la coalición "Unidos para Ganar", de las ilegales e ilegítimas imputaciones hechas por el representante del Partido Acción Nacional".

CUARTO.- Proveer de conformidad el contenido del presente ocurso, por ser procedente y apegado a derecho."

VIII.- Atendiendo a lo solicitado por el Partido Acción Nacional en la denuncia de mérito, la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 fracciones II y IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados mediante los oficios números IEE/SG-186/07, IEE/SG-187/07, IEE/SG-188/07, IEE/SG-189/07, IEE/SG-190/07, IEE/SG-191/07, IEE/SG-192/07, IEE/SG-193/07, IEE/SG-194/07, IEE/SG-195/07 y IEE/SG-196/07 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, así como el oficio número IEE/SG-099/08 y el memorándum IEE/SG-128/07, ambos de fecha doce de febrero de dos mil ocho, siendo los siguientes:

- *Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*
- Al Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado para que informara sobre la existencia de algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.
- Al Jefe del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad que informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
- Al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el objeto que informara respecto a las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas

de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha

- Al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que informara sobre la existencia de algún registro patronal a nombre del C. Kamel Nacif Borge, así como si el C. Amin Farjat o Amin Farjad cuenta con registro de alta como trabajador o empleado de alguna empresa y en caso de ser así el nombre de dicha empresa.
- Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla se le solicitó comunicara si dentro del Registro de Sociedades figura el C. Kamel Nacif Borge en calidad de socio.
- Al Director de W Radio para que informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- Al Director General del Periódico Digital e-consulta para que comunicara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT” publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A los Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna con el fin de que informaran si contaban en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Kamel Nacif apoyó campaña de Marín” publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro.

Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

- Al Director de la Jornada de Oriente para que informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “EL IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín” publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- Al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla con el fin de que solicitara a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación para que informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral y en caso de ser afirmativo lo anterior remitiera la acreditación respectiva. Además de que remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.

En respuesta al requerimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-196/07, el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla, Ingeniero Daniel Ortiz y Caso, mediante oficio sin número

de fecha cinco de septiembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha once de septiembre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

**“LIC. NOÉ JULIÁN CORONA CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E**

En atención a su oficio número IEE/SG-196/07 de fecha 27 de agosto del 2007 recibido en esta a mi cargo el 4 de septiembre del actual, me permito informar a usted que esta Dependencia del Ejecutivo federal no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión.

Sin más por el momento. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”

Asimismo, al requerimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-186/07, el Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, C. José Jorge Mena Ortiz, mediante oficio número CFT/D01/STP/6469/2007 de fecha once de septiembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha dieciocho de septiembre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

**“LIC. NOÉ JULIÁN CORONA CABAÑAS
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Puebla
P r e s e n t e . -**

Por instrucciones del Arq. Héctor Osuna Jaime, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y en alcance a su atento oficio folio IEE/SG-186/07 de fecha 27 de agosto del año en curso, relativo a su solicitud sobre diversos datos específicos de una línea de teléfono en la ciudad de Puebla, estado de Puebla, tengo a bien manifestarle lo siguiente:

Que de conformidad con la legislación y regulación vigentes, lamentablemente este órgano regulador no lleva un registro detallado sobre los números de líneas telefónicas que son asignadas a los concesionarios en apego al *Plan Técnico Fundamental de Numeración*, lo que nos hace imposible proveerle datos respecto de “cambios en la línea”, “usuario” y “status de la línea” sobre un número telefónico particular.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con motivo de lo anterior, atentamente le sugiero turnar la solicitud de información a dicho concesionario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones”

Por otro lado, al requerimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-190/07, el Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Francisco Javier Bermúdez Almada, mediante oficio número 229001910100/358/07 de fecha doce de septiembre de dos mil siete presentado ante la Secretaría general de este Instituto en fecha cuatro de octubre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

**“LIC. NOE (SIC) JULIAN (SIC) CORONA CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E**

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A su vez, al requerimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-189/07, el Subadministrador de Apoyo Técnico Jurídico para la Aplicación de la Normatividad del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Enrique Olvera Flores, mediante oficio número 322-SAT-VI-I-AO-3537 de fecha trece de septiembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

“LIC. NOÉ JULIAN (SIC)CORONA CABAÑAS
Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
15 Poniente 3515, Colonia Belisario Domínguez.
C.P. 72180, Puebla, Pue.
P r e s e n t e

Me refiero al diverso No. 529-V-DDD-0714, de fecha 11 de septiembre de 2007, recibido en esta unidad administrativa el día 13 del mes y año en curso, por el cual la C. Directora de Delitos Diversos de la Dirección General de Delitos Diversos de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones adscritas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, en relación con su oficio IEE/SG-189/078075 del 27 de agosto último, solicita se proporcione información relacionada con los **CC. KAMEL NACIF BORGE y AMIN FARJAT o AMIN FARJAD** en los términos solicitados; al respecto, con fundamento en el artículo 25 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, comunico a usted lo siguiente:

De conformidad con el artículo 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera como información reservada la que por disposición expresa de una ley, sea considerada confidencial, entre otras, en este sentido de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por

terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, salvo los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deben suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales o cuando la información la soliciten autoridades judiciales en procesos de orden penal o los tribunales competentes que conozcan las pensiones alimenticias. Por su parte, el artículo 5º del citado ordenamiento, prescribe que las disposiciones fiscales que señalen excepciones a las mismas, son de aplicación estricta.

Asimismo, el artículo 8º, fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determina que todo servidor público está obligado a custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Además los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, establecen que incurre en delito de revelación de secretos, el servidor público que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que resulta perjudicado, revele algún secreto o comunicación que conozca o haya recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

Por lo expuesto, legalmente no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de no satisfacerse los supuestos de excepción previstos en los ordenamientos en vigor antes citados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”

De igual forma, al requerimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-187/07, el Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, Ingeniero José Octavio Muñoz Reyes, mediante oficio número RFE/VE/8438/2007 de fecha uno de octubre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha tres de octubre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

**“LIC. JORGE SÁNCHEZ MORALES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E**

En respuesta al Oficio No. IEE/SG-187/07 signado por el Lic. Noé Julián Corona Cabañas Secretario General del Instituto Electoral del Estado, por medio del cual solicita con fundamento en el artículo 93, fracción XXI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 32 del Reglamento para la tramitación de denuncias interpuestas por los partidos políticos y/o coaliciones acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, se le informe si existe algún registro a nombre de los CC. **Kamel Nacif Borge** y **Amin Fajar** o **Amin Farjad**, así como el domicilio que conste en dicho registro, para que estén en posibilidad de determinar la ubicación de las personas en mención y toda vez que esta Vocalía realizo (sic) la consulta correspondiente con la Secretaría Técnica Normativa, me permito comunicar a Usted lo siguiente:

Como es de su conocimiento, de conformidad con los artículos 41, párrafo 2, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, 69, párrafo 1, inciso e), y 70, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es el organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, el

cual tiene a su cargo en forma integral y directa las actividades relativas al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electorales. La realización de dichas funciones se rige por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En este sentido, con el fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática y apoyar los procesos electorales locales, se celebran Convenios de Apoyo y Colaboración para la aportación de elementos, información y documentación de carácter electoral, y así, utilizar el Padrón Electoral, las Listas Nominales de Electores con fotografía, la Credencial para Votar con fotografía y demás documentos y apoyos técnicos necesarios para los comicios que se llevan a cabo en las entidades, mismo, que son proporcionados por el Registro Federal de Electores.

Por lo anterior, en términos de los artículos 83, párrafo 1, inciso b) y m), y 89, párrafo 1, inciso a) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejero Presidente tiene la atribución de convenir con las autoridades competentes la información y documentación que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para los procesos electorales locales, y el Secretario Ejecutivo tiene la facultad de representar legalmente al Instituto Federal Electoral, así como la de participar en los convenios que se celebren con las autoridades competentes respecto a la información y documentos que habrá de aportar la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para los procesos electorales locales.

En este sentido, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla han celebrado múltiples convenios relativos a los instrumentos y productos electorales que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores le aporta para la realización de sus procesos electorales locales, en virtud de que dicho organismo electoral local es el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones de Gobernador, de Diputados al Congreso Local y de los integrantes de los Ayuntamientos de los municipios del estado.

Es por ello que, al prestar especial atención al ámbito de competencia al que se encuentran sujetos el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, en virtud de las atribuciones que expresamente le han sido conferidas en los ordenamientos legales electorales correspondientes, encontramos que el primero tan solo se encuentra facultado para proporcionar los instrumentos y productos electorales a las autoridades competentes, es decir, a los organismos electorales estatales con motivo de los procesos electorales locales, tal y como establecen los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, incisos f) y u), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el último, para utilizar los instrumentos electorales que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores le proporcione para su uso exclusivo en dichos procesos electorales estatales, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Por lo que, el pasado 01 de junio de 2007 el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Puebla celebraron Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en materia del Registro Federal de Electores, con motivo del proceso electoral 2007.

Así mismo, es de resaltar que el artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que este Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por el código de la materia y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de Juez competente.

En razón de lo anteriormente expuesto y considerando que la información que solicita el Instituto Electoral del Estado de Puebla será utilizada para que atienda la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional relacionada con presuntas violaciones del Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en consecuencia no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estricto apego a los principios de certeza y legalidad que rigen las actividades del Instituto Federal Electoral, tal y como los dispone el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra legalmente impedida para proporcionar al Instituto Electoral del Estado la información que requiere.

Independientemente de lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima tercera del referido Convenio Específico, el próximo 11 de octubre de 2007, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará al Instituto Electoral del Estado de Puebla la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, en donde se encuentran todos los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral e incluidos en la Lista Nominal de Electores, en el apartado correspondiente a esta entidad federativa, que obtuvieron su Credencial para Votar al 31 de agosto de 2007.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”

Asimismo, a los requerimientos efectuados mediante oficios números IEE/SG-188/07 e IEE/SG-189/07, el Administrador Central de la Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, mediante oficio número 324-SAT-VII-37879 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete manifestó lo siguiente:

“Lic. Noé Julián Corona Cabañas
Secretario General del Instituto
Electoral del Estado de Puebla.

En atención a sus oficios Números IEE/SG-189/07 y IEE/SG-188/07 sin fechas, recibidos en esta Administración Central a mi cargo el día 8 de noviembre del año en curso, dirigidos al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Agustín Guillermo Carstens Carstens, y al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Ing. José María Zuribía Maqueo, respectivamente, a través de los cuales solicita se informe sobre las empresas en las que los **CC. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad**, aparecen indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de esas empresas, durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha, a fin de que ese Instituto, este en posibilidad de atender la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional, en contra de presuntas violaciones del Partido Revolucionario en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Sobre el particular, me permito comentarle que el Servicio de Administración Tributaria, se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información que solicita, toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

El citado artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, establece como excepciones a la reserva, los casos que señalen las leyes fiscales y aquéllos en que deben suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos de orden penal o los Tribunales competentes que conozcan las pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedad de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras.

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, y considerando que su petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información que solicita.

Asimismo, el artículo 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC), establece el derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que los contribuyentes o terceros relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto en el multicitado artículo 69 del C.F.F.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”

Al requerimiento efectuado mediante memorándum IEE/SG-128/07, la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación mediante memorándum número IEE/DPPM-0092/08 de fecha catorce de febrero de dos mil ocho presentado ante la Secretaría General en la misma fecha informó lo siguiente:

**“LIC. NOÉ JULIÁN CORONA CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción XXI y 105 fracción XII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en contestación a su similar No. IEE/SG-128/08, anexo le remito lo siguiente:

- Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2004, correspondiente al candidato a Gobernador Mario Plutarco Marín Torres (formato 16). Por cuanto hace a la documentación soporte de dicho informe, le comunico que la misma fue devuelta al ente político en cuestión, en términos de lo dispuesto por el diverso 23 del Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos

acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, vigente al momento de concluir el procedimiento de fiscalización conducente.

Respecto a “... si el C. Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral”, le comunico que en los archivos de esta Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que dicho Ciudadano ha ostentado tal cargo ante este Instituto.

...

Por otro lado, al requerimiento girado mediante oficio número IEE/SG-191/07, el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Licenciado Juan Carlos Vicente Cabrera, mediante oficio número R.P.P./2179 de fecha trece de diciembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho manifestó lo siguiente:

**“LIC. NOE (SIC) JULIAN (SIC) CORONA CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E**

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, aunado a lo antes indicado y en virtud de la petición del Partido Acción Nacional mencionada en la denuncia de mérito, el Secretario General de este Organismo en fecha siete de marzo de dos mil ocho elaboró constancia sobre el contenido de las páginas de internet: www.e-consulta.com, www.laiornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.pez y http://www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_k_amel_marin_campana.html.

IX.- Una vez integrado el expediente con todas las actuaciones debidamente desahogadas en el mismo, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, mediante el memorándum número IEE/SG-343/08 de fecha dos de abril de dos mil ocho, el Secretario General remitió el expediente de la denuncia que nos ocupa a este Órgano Auxiliar del Consejo General, para la integración del mismo.

X.- En sesión extraordinaria de fecha tres de mayo de dos mil ocho, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncia aprobó el acuerdo identificado con el número ACUERDO-001/CVTD/030508 teniéndose por remitido el expediente identificado con el número DEN-PP-001/07 en términos del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

XI.- En sesión ordinaria iniciada en fecha dieciséis de junio de dos mil ocho y concluida el once de julio del mismo año la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncia aprobó los acuerdos identificados con los números ACUERDO-10/CVTD/160608, ACUERDO-11/CVTD/160608, ACUERDO-12/CVTD/160608 y ACUERDO-13/CVTD/160608, a través de los cuales se instruyó al Secretario General de este Organismo Electoral a efecto de que girara oficios recordatorios a los medios de comunicación: W Radio, Periódico Digital e-consulta, La Jornada de Oriente y Periódico Digital La Quinta Columna.

El Secretario General mediante oficios identificados con los números IEE/SG-795/08, IEE/SG-796/08, IEE/SG-797/08 e IEE/SG-798/08 de fecha catorce de julio del año en curso solicitó de nueva cuenta la información necesaria para atender la solicitud de investigación del Partido Acción Nacional, señalándose en dichos comunicados que en caso de no contar con la información de mérito, esta Comisión dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo.

XII.- En sesión ordinaria de fecha veintiséis de julio del año en curso la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncia aprobó mediante acuerdo identificado con el número ACUERDO-01/CVTD/260708 instruir al Secretario General de este Organismo Electoral para que realizara la certificación y constancia de hechos del contenido del audio casete aportado por el Partido Acción Nacional como medio de prueba en la denuncia de mérito a efecto de que se cuente con los elementos suficientes para la valoración de dicha prueba.

Atendiendo a lo acordado por esta Comisión, el Secretario General en fecha once de agosto del presente año elaboró la constancia del contenido del audio casete en comento.

XIII.- En sesión ordinaria iniciada en fecha veinticinco de agosto del año en curso la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncia aprobó instruir al Secretario General de este Organismo Electoral para que solicitara al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado si en dicho carácter ratificaba el escrito de contestación antes transcrito.

El Secretario General atendiendo a lo acordado por esta Comisión mediante oficio identificado con el número IEE/SG-860/08 requirió al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

En fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Licenciando José Porfirio Alarcón Hernández, presentó ante la Secretaría General de este Instituto un escrito a través del cual manifiesta:

**“C. LIC. NOÉ JULIÁN CORONA CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DEL
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

En atención a su oficio No. IEE/SG-860/08 de fecha 25 de agosto de 2008 por el que me solicita ratificar el contenido de la contestación a la vista de la denuncia presentada en contra del partido político que represento por el Partido Acción Nacional, hago de su conocimiento que como lo señale en dicha contestación la misma se presentó en atención a la vista que se me había dado con el escrito de denuncia presentado por el representante propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en contra del Partido Revolucionario Institucional, el cual formaba parte de la Coalición Unidos para Ganar que representaba ante éste Órgano Electoral en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil siete, refiriendo que se producía la contestación manifestando lo que a mi representación importaba, es decir, lo que a la representación del Partido Revolucionario Institucional importaba.

Con lo anterior, se aduce que la contestación en comento se presentó en mi carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que en ese momento formaba parte de la Coalición Unidos para Ganar.

Sin otro particular a que referirme, le expreso las seguridades de mi consideración alta y distinguida.”

C O N S I D E R A N D O

1.- Que, en términos del artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas en las cuales la ley determinará las formas específicas de intervención de los partidos políticos, éstos últimos al ser entidades de interés público tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En este entendido, en relación con lo anterior el diverso 116 de nuestra Carta Fundamental estableció en su base IV que las Constituciones y leyes de los Estados deben de garantizar que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones se realicen en apego a los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, así como se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

El citado dispositivo constitucional de igual forma refiere que se deberá de garantizar que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias.

Ante tal virtud, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla dispuso en sus artículos 3 y 4 las bases a través de las cuales se renovarían los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Entidad, definiendo el marco normativo que regulará dichas elecciones, señalando que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla determinará las etapas del proceso electoral y la forma de participación de los ciudadanos en el mismo. Además, dispondrá los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos, así como un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

De igual forma, los artículos 3 fracción II de la Constitución Política del Estado y 71 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establecen que la organización de las elecciones es una función estatal encomendada a un organismo de carácter público y permanente, autónomo e independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral del Estado. El ejercicio de dicha función se rige por los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, tal como se señala en el diverso 8 del Código de la materia.

Asimismo, el artículo 75 del Código en cita señala como fines de este Instituto, entre otros, los de vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local, las del Código de la materia y demás ordenamientos, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; el de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Miembros de los Ayuntamientos; y el de asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.

Ahora bien, si bien es cierto que la función estatal de organizar las elecciones se encuentra encomendada al Instituto Electoral del Estado, el diverso 6 del mencionado Código dispone que los ciudadanos, los partidos políticos y el Congreso del Estado son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

En este sentido, al ser los partidos políticos corresponsables de dicha función estatal le son concedidos en términos del artículo 42 del Código Comicial derechos, entre los que se encuentran el de ejercer la corresponsabilidad que la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código de la materia les confieren en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; el de gozar de las garantías que el Código en cita les otorga para realizar libremente sus actividades; el de disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público, en términos de estas disposiciones; y el de pedir al Consejo General aportando elementos de prueba que se investiguen las actividades de otros partidos políticos, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave y sistemática.

Tal como se hizo mención, los institutos políticos que participan en la vida política del Estado cuentan con obligaciones que deben de observar en el desarrollo de su función, refiriéndose en el numeral 54 fracciones I y XI del Código de la materia que entre dichas obligaciones se encuentran las de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas ajustándolas a los principios de representación y democracia; respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos, además de informar al Consejo General del inicio y término de sus precampañas, de los procedimientos para la elección de sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular, particularmente del régimen de financiamiento de los mismos, los topes a los gastos de campañas y el origen y los montos totales de recursos utilizados.

En este entendido, en términos del artículo 79 el Consejo General del Instituto es el Órgano Superior de Dirección y es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de legalidad, imparcialidad,

objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades de este Instituto, atribuyéndosele en el artículo 89 fracciones II, III, XI, XIX, XX, XXII y LIII del Código en cita, entre otras, las siguientes facultades:

- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en Código de la materia;
- Organizar el proceso electoral y vigilar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer de los informes específicos y de las actividades que estime necesario solicitarles;
- Determinar, de conformidad con lo que establecen la Constitución Local y este Código, el monto del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos;
- Revisar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego al Código de la materia y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
- Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a este Código; asimismo, constituir la Comisión Revisora investida de facultades de fiscalización;
- Investigar por los medios legales pertinentes, cualquier hecho relacionado con el proceso electoral y, de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios realizados por las autoridades u otros partidos en contra de su propaganda, candidatos o miembros; y
- Dictar los acuerdos necesarios a fin de cumplir las atribuciones que le confiere el Código Comicial.

Asimismo, tal y como refieren los diversos 392 y 393 del Código en comento el Consejo General conocerá y resolverá, en su caso, de las infracciones o violaciones que a las disposiciones del citado cuerpo legal o acuerdos de los Órganos Electorales cometan los partidos políticos o coaliciones, los que podrán ser sancionados con multa de trescientos a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado, debiendo comunicar para tal efecto al Tribunal Electoral del Estado de Puebla los acuerdos y resoluciones tomadas sobre las irregularidades en que hayan incurrido los partidos políticos o coaliciones.

Bajo este contexto, tomando en consideración los preceptos legales mencionados en el cuerpo del presente dictamen se advierte que el Consejo General de este Instituto cuenta con facultades expresas para vigilar que las actividades de los partidos políticos o coaliciones se desarrollen con apego al Código de la materia; así como para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia electoral y del Código Comicial, además de garantizar la observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que rigen la función estatal de organizar las elecciones.

Derivado de la existencia de dichas atribuciones explícitas, se advierte la existencia de una facultad implícita consistente en que para hacer efectivas dichas atribuciones el Consejo General de este Instituto cuenta con la facultad de prevenir o corregir la comisión de conductas que no se apeguen a las disposiciones legales aplicables que se presenten ante situaciones extraordinarias

y de tomar las medidas pertinentes para preservar el respeto a dichos preceptos legales garantizando con ello el debido desarrollo del Proceso Electoral.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio orientador emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto a la letra señalan:

<<INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PARA EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD IMPLÍCITA, POR EL CONSEJO GENERAL, REQUIERE DE UNA EXPRESA PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE ÉSTA.—El inciso z), del artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, autoriza al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para dictar los acuerdos necesarios con el objeto de hacer efectivas las atribuciones contenidas en los incisos del a) al y), de ese numeral y las demás señaladas en el propio ordenamiento. Esta facultad implícita requiere la existencia, a su vez, de alguna expresa, a la que tienda hacer efectiva, por cuanto a que, el otorgamiento de la implícita al Consejo General, por el Congreso de la Unión, tiene como aspecto identificatorio la relación de medio a fin entre una y otra. Si el Consejo General responsable del acto recurrido, afirma haberlo emitido en ejercicio de una facultad implícita, pero en realidad no hace efectiva una expresa o explícita, dicho acto carece de la debida fundamentación y motivación, por no existir esa relación de causa-efecto entre los dispositivos legales citados y los hechos a que pretende adecuarse.

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/98.—Partido Revolucionario Institucional.—18 de marzo de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, página 57, Sala Superior, tesis S3EL 047/98.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 656-657.>>

Así, el Consejo General de este Instituto consideró necesario establecer en ejercicio de las facultades implícitas, un procedimiento administrativo que sirviera de instrumento para conocer e investigar las faltas cometidas por los partidos políticos y/o coaliciones a las disposiciones establecidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el cual como se hizo mención en el antecedente número IV de este dictamen fue aprobado por el mismo en sesión ordinaria de fecha diecisiete de agosto del año dos mil siete denominándolo “Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado”.

En este entendido, el Consejo General considerando la disposición contenida en el artículo 108 del Código Comicial del Estado, tal como se refirió en el antecedente II de este dictamen aprobó la creación de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias con la finalidad coadyuvar en el desempeño de sus atribuciones, las cuales han quedado referidas con antelación.

Ahora bien, aún cuando la materia de la denuncia materia del presente dictamen se refiere a la fiscalización de los recursos otorgados al Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto en el año dos mil cuatro le compete conocer respecto a la misma a la

Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias y no la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos

Lo anterior, atendiendo a que la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos en términos del artículo 15 fracción V del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado cuenta con las siguientes atribuciones:

“...

- b) Revisar, auditar y fiscalizar los informes justificatorios, así como el sustento documental que presenten los partidos políticos, en términos del reglamento correspondiente;
- c) Requerir a los partidos políticos los informes justificatorios con sustento documental, así como la documentación e informes que considere necesarios para realizar su función;
- d) Formular observaciones a los informes justificatorios con sustento documental que presenten los partidos políticos, requiriéndoles la solventación de las mismas en los plazos establecidos en el reglamento correspondiente;
- e) Recibir de los partidos políticos la solventación de las observaciones, en los plazos que determine el reglamento correspondiente;
- f) Elaborar el dictamen correspondiente a la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos con los que cuentan los partidos políticos, en términos del reglamento que para el efecto emita el Consejo General;

...”

Así, se advierte que la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos aún cuando cuenta con atribuciones para conocer respecto a la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos con los que cuentan los partidos políticos no se le otorgan atribuciones para conocer respecto de denuncias relacionadas con la materia, situación que el Reglamento de Comisiones en referencia sí le otorga a la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en su artículo 15 fracción VIII, incisos a), b) y f) del aludido Reglamento, los cuales refieren:

“...

- a) Recibir y sustanciar el expediente integrado con motivo de la presentación de una denuncia, en términos del reglamento correspondiente;
- b) Elaborar el dictamen correspondiente derivado de las denuncias presentadas, en términos del reglamento correspondiente;

...”

- f) Las demás que les confiera el Código, el presente Reglamento y el propio Consejo General.”

Por lo que esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias es competente para conocer y emitir el presente dictamen en términos de lo señalado anteriormente, así como por lo dispuesto por los artículos 7 fracciones I, II, III, V, VI y VII, 30, 31 y 33 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

2.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción VII del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, este Órgano Auxiliar del Consejo General deberá analizar en primer lugar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 18 de dicho Reglamento, en atención a que su estudio es preferente y de orden público. Dicho numeral dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 18.- La denuncia será improcedente y, por tanto, desechada de plano cuando:

- I. Su interposición sea ante autoridad diversa a la competente;
- II. El escrito no cuente con los requisitos señalados en el artículo 10 del presente Reglamento;
- III. El denunciante no subsane las omisiones mencionadas en el apercibimiento señalado en el artículo 13 de este Reglamento;
- IV. El promovente no acredite su personería o interés jurídico;
- V. Por actos o hechos iguales imputados a un mismo partido político o coalición que hayan sido materia de otra denuncia que cuente con resolución del Consejo; y
- VI. Cuando los actos o hechos denunciados no sean competencia del Instituto.”

Bajo este contexto, la denuncia de mérito fue presentada ante la Oficialía de Partes de Instituto dirigida al Consejero Presidente del Consejo General de este Organismo quien en términos del artículo 11 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado la remitió a la Secretaría General para el trámite correspondiente.

Asimismo, como se señaló en el antecedente número IX del presente dictamen el Secretario General una vez integrado el expediente lo remitió a esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias quien es competente para conocer y emitir el presente dictamen en términos de lo indicado en el considerando 1 de este documento.

Aunado a lo anterior, esta Autoridad Auxiliar estima que el escrito de denuncia materia de este dictamen cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Ordenamiento Legal en comento, mismo que establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 10.- La denuncia se interpondrá por escrito ante el Consejo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Partido político o coalición que denuncia;
- II. Nombre del representante, con firma autógrafa o huella digital;
- III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- IV. Partido político o coalición denunciado;
- V. La relación clara y sucinta de los hechos en que se motive la denuncia, así como los preceptos presuntamente violados; y
- VI. El promovente deberá ofrecer o aportar las pruebas con que cuente tendientes a demostrar la veracidad de su dicho.”

Esto es, la denuncia materia del presente dictamen fue interpuesta por escrito ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, señalando lo siguiente:

- Que el partido político denunciante es el Partido Acción Nacional;
- La denuncia de mérito es presentada por su entonces representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado;
- Señala domicilio para oír y recibir notificaciones;
- Refiere como el partido político denunciado el Partido Revolucionario Institucional;
- Contiene una relación clara y sucinta de los hechos en que motivan su denuncia y los preceptos presuntamente violados; y
- El Partido Acción Nacional ofrece y aporta las pruebas que considera idóneas para demostrar la veracidad de su dicho.

Por otro lado, del análisis acucioso de las constancias que obran en la denuncia radicada bajo el número DEN-PP-001/07 se desprende que por cuanto hace a la personería del promovente Licenciado Rafael Guzmán Hernández, se le tiene por reconocida en términos de los artículos 42 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 9 y 10 fracción II del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado y en atención a que la constancia que lo acreditaba como representante propietario del Partido Acción Nacional, se encuentra en el archivo del Consejo General de este Instituto.

De igual forma, por lo que hace a la personería del Licenciado José Porfirio Alarcón Hernández, esta se le tiene por reconocida en términos de los artículos 42 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de

Puebla, 9 y 10 fracción IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado y en atención a que la constancia que lo acredita como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra en el archivo del Consejo General de este Organismo.

Ahora bien, del archivo de este Organismo Electoral se advierte que no existe resolución alguna del Consejo General en la cual se adviertan actos o hechos iguales imputados al Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, como se indicó en el considerando 1 del presente dictamen el Instituto Electoral del Estado es competente para conocer de los hechos denuncias por el Partido Acción Nacional por presuntas violaciones a las disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

3.- Que, a efecto de entrar al análisis y valoración de los argumentos de hecho y de derecho, los documentos y demás actuaciones contenidas en el expediente, tanto las presentadas al momento de la interposición de la denuncia, como las contenidas en el escrito de contestación, se deberá observar el principio de exhaustividad al que están obligadas todas las autoridades, para efectos de emitir el proyecto de dictamen que en derecho resulte procedente.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

“ PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligados a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por mas que le crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no solo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 43/2002.”

4.- Que, una vez desestimadas las causales de improcedencia resulta conveniente efectuar por una parte el análisis de las pretensiones del promovente realizadas en el escrito de denuncia y la defensa del partido político presuntamente infractor de la norma, así como la debida valoración de los elementos probatorios que cada uno aportó para demostrar la procedencia de sus aseveraciones; análisis y valoración que observarán en todo momento las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, el principio de exhaustividad referido en párrafos precedentes y los acuerdos tomados por esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, a fin de verificar si los actos denunciados son violatorios de los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, los cuales establecen:

“ARTÍCULO 48.- El financiamiento privado son las aportaciones de recursos económicos o en especie que no provienen del erario público y que los partidos políticos perciben de sus militantes, de simpatizantes o por sus propios medios, para el desarrollo, promoción y fortalecimiento de sus actividades, el que se sujetará a las modalidades y limitaciones siguientes:

I.- Financiamiento por sus militantes, el cual se conformará por las cuotas y aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales o por las cuotas voluntarias y personales **que los aspirantes a candidatos o candidatos a cargos de elección popular** aporten para sus **precampañas o campañas, respectivamente;**

II.- Financiamiento procedente de simpatizantes, que se conformará por las cuotas y aportaciones o donativos que en dinero o en especie y por voluntad propia, hagan a los partidos políticos las personas físicas o morales mexicanas **con domicilio en el país; las personas morales deberán estar legalmente constituidas y cumplir con sus obligaciones fiscales.**

El financiamiento privado a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se sujetará a las reglas siguientes:

a) Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de militantes y/o de simpatizantes, por una cantidad superior al diez por ciento del

monto del financiamiento público para actividades ordinarias;

b) De las aportaciones en dinero los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se harán constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, siempre y cuando no implique venta de bienes o artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables;

c) Las aportaciones que en dinero realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda;

d) Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda, los límites establecidos en el inciso anterior;

e) Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación; y

f) Los contratos que celebren los partidos políticos deberán registrarse ante el Instituto para fines de cuantificación del financiamiento privado.

III.- Autofinanciamiento, que estará constituido por los ingresos que los partidos políticos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas de editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse de fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes. Para efectos de este Código, cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos; y

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, que para obtenerlo, los partidos políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban, adicionalmente a las provenientes de las modalidades del financiamiento señaladas en el presente artículo. El financiamiento por rendimientos financieros se sujetará a las reglas siguientes:

a) Las aportaciones que se realicen a través de esta modalidad, estarán sujetas a las disposiciones contenidas en el inciso c) de la fracción II de este artículo y demás disposiciones aplicables a este Código y las leyes correspondientes, atendiendo al tipo de operación realizada;

b) Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, con excepción de la adquisición de acciones bursátiles y demás relativas; y

c) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.”

“ARTÍCULO 49.- Los partidos políticos, bajo ninguna circunstancia, podrán aceptar aportaciones o donativos, sea en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona de:

...

VII.- Las empresas mexicanas de carácter mercantil, así como aquéllas cuyo objeto social sea la realización de juegos de azar.”

“**ARTÍCULO 52 bis.-** Los partidos políticos deberán rendir ante la comisión correspondiente del instituto, los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

...

B. Informes de campaña:

...

III.- En estos informes se reportarán el origen de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.”

“**ARTÍCULO 54.-** Los partidos políticos tienen las obligaciones siguientes:

...

XI.-Informar al Consejo General del inicio y término de sus precampañas, de los procedimientos para la elección de sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular, particularmente del régimen de financiamiento de los mismos, los topes a los gastos de campañas y el origen y los montos totales de recursos utilizados;

...”

Ahora bien, debe tomarse en consideración que tal y como lo señala el Partido Acción Nacional a través de su entonces representante acreditado, la denuncia materia del presente dictamen versa sobre la aplicación de los recursos del Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro.

En ese sentido, debe considerarse que en el numeral 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla se instituye que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con financiamiento público para llevar a cabo sus actividades ordinarias, sus actividades tendientes a la obtención del voto y para acceder equitativamente a los medios de comunicación social. Además de que el Consejo General de este Organismo debe fijar los criterios para determinar topes a los gastos de campaña de los partidos políticos, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; así como las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estos rubros.

Atendiendo a lo anterior, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla dispone en sus artículos 44 y 45 que los partidos políticos que participen en los procesos electorales tendrán derecho en forma equitativa al financiamiento público y privado para el sostenimiento de sus actividades

ordinarias y las de sus actividades tendientes a la obtención del voto universal, independientemente de las demás prerrogativas que les otorguen otros ordenamientos, así como que el régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades de financiamiento público y privado; el primero de ellos prevalecerá sobre otros tipos de financiamiento y deberá de ser para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las actividades tendientes a la obtención del voto y el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación. El financiamiento privado que no será mayor al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político podrá provenir de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos o fideicomisos constituidos como inversiones por los propios partidos políticos.

En ese orden de ideas, los numerales 46 y 47 del cuerpo legal en cita establecen que monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos será la cantidad que resulte de multiplicar el treinta y cinco por ciento del salario mínimo vigente en el Estado por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Entidad con corte al treinta y uno de enero del año de la elección, estableciendo la forma en la cual se entregará y las reglas bajo las cuales se otorgará a los partidos políticos.

En cuanto al financiamiento privado, se dispone en el artículo 48 del Código Comicial las modalidades y limitantes al mismo, entre las cuales se encuentra que respecto al financiamiento por sus militantes y/o simpatizantes cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero por una cantidad superior al diez por ciento del monto del financiamiento público para actividades ordinarias y que las aportaciones que en dinero realice cada persona física o moral facultada para ello tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos políticos en el año que corresponda.

Por otro lado, en los artículos 49 y 50 del Código en cita indican que los partidos políticos, bajo ninguna circunstancia, podrán aceptar aportaciones o donativos, sea en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial y los Ayuntamientos; las dependencias, entidades u organismos de la administración pública del Gobierno Federal, Estatal, Municipal, centralizadas o paraestatales y en general todos aquellos organismos o instituciones que ejerzan fondos públicos; las personas físicas o jurídicas extranjeras; los partidos políticos extranjeros; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; los ministros de culto y las asociaciones religiosas y las empresas mexicanas de carácter mercantil, así como aquéllas cuyo objeto social sea la realización de juegos de azar. Además de que se prohíbe que los partidos políticos acepten aportaciones anónimas superiores a cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado y que contraten créditos de la Banca de

Desarrollo para el financiamiento de sus actividades.

Ahora bien, los numerales 51, 52, 52 bis y 53 del mencionado Código se refieren diversas reglas respecto de la fiscalización del origen, monto y aplicación de los recursos con que cuenten los partidos políticos, fijándose que los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la administración de los recursos con que cuenten, así como de la presentación de los informes justificatorios de conformidad a las modalidades que establezca la normatividad aplicable para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos. Asimismo se dispone la creación de una Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos, los informes justificatorios que presenten sobre el origen y uso de todos sus recursos anuales, de precampaña y campaña. Además se fijan reglas respecto a la presentación de los informes justificatorios señalándose tres tipos de informes: anuales, de campaña y precampaña. De igual forma, se menciona que en caso de que la Comisión Revisora determine irregularidades en los informes justificatorios, remitirá su dictamen al Consejo General quien, previa garantía de audiencia al partido político de que se trate, resolverá lo conducente y, en su caso, lo remitirá al Tribunal para determinar las sanciones que procedan, si a los informes justificatorios de los partidos políticos no se determinan irregularidades, la Comisión Revisora remitirá su dictamen al Consejero Presidente, para la aprobación del Consejo General.

Una vez mencionado lo anterior, se advierte que la aplicación de los recursos del Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro y el informe justificatorio respectivo cuenta con un dictamen consolidado de la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos, que fue en su oportunidad debidamente aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su sesión ordinaria de fecha diecisiete de marzo de dos mil seis, dictamen y resolución que al no haber sido impugnados en su momento constituyen un acto consumado y consentido, es decir, es un acto definitivo y firme que constituye cosa juzgada, en razón de que no fue impugnado por ningún partido político en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia.

Sin embargo, debe decirse que esta Autoridad Electoral no puede finiquitar con una sola determinación las diversas obligaciones a que se encuentran sujetos los partidos políticos; pues no puede soslayar el cumplimiento de las normas electorales por el hecho de que haya existido un dictamen y su correspondiente resolución respecto de los informes proporcionados por los partidos políticos. Lo anterior, no significa en modo alguno que este Órgano Auxiliar revisara de nuevo la documentación a la cual recayó un dictamen y resolución, sino que se analizara

la comisión de una supuesta violación a las disposiciones del Código Comicial en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

En efecto, como se comentó el artículo 52 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establece la obligación de los partidos políticos de presentar los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, estableciendo plazos para su presentación a este Instituto. Asimismo, establece el procedimiento y plazos para que el mismo revise dichos informes.

De lo anterior se desprende que los partidos políticos cumplen en un primer momento con presentar los informes del ejercicio correspondiente; posteriormente en el transcurso de la revisión si se advierte la existencia de errores u omisiones técnicas se le da al partido político un determinado plazo para que proporcione las aclaraciones y rectificaciones, así como los documentos que amparen sus operaciones. De esto, se advierte que lo que se dictamina en ese procedimiento es la información proporcionada por el partido político.

Ahora bien, si lo que se dictaminó en su momento fue la información presentada por el partido político es dicha información la cual en efecto puede ser considerada como cosa juzgada, es decir el resultado de dicho procedimiento de fiscalización no puede variar.

Es cierto que la autoridad no debe volver a calificar informe alguno que haya sido rendido oportunamente, ni la documentación que en ese momento se exhibió como sustento de lo informado, ni reevaluar o dejar sin efecto un dictamen, pues de esta manera verdaderamente se estaría atentando contra el principio de cosa juzgada. Solamente podrá pronunciarse, con posterioridad, sobre hechos novedosos que se desprendan o tengan su origen a partir de distintos elementos indiciarios de los que no hubiera tenido conocimiento con anterioridad.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia y el criterio orientador emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales señalan:

“ COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.—La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida,

se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-155/98.—Partido Revolucionario Institucional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad en el criterio.

Recurso de apelación. SUP-RAP-023/2000.—Aquilés Magaña García y otro.—21 de junio de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/2003.—Partido de la Sociedad Nacionalista.—27 de febrero de 2003.—Unanimidad de votos.

Revista *Justicia Electoral* 2004, suplemento 7, páginas 9-11, Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2003.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 67-69."

Ahora bien, debe aclararse que a efecto de determinar si cierto ingreso o gasto fue efectivamente reportado en un informe presentado por un partido político al cual recayó un dictamen, la autoridad puede válidamente acudir a la información contenida en dicho informe y en el dictamen correspondiente, con la única finalidad de verificar si tal ingreso o gasto fue efectivamente materia de un pronunciamiento por parte de la autoridad, sin que ello suponga la reevaluación, ni mucho menos la alteración, de los términos del dictamen consolidado ya emitido.

Por lo tanto, se reitera esta Comisión solamente puede pronunciarse en cuanto al fondo de la denuncia, respecto de aquellos hechos que constituyen violaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, sin que con ello este ejerciendo facultades que le corresponden a la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos y se este pronunciando respecto a la documentación específicamente revisada y concretamente dictaminada por dicha Comisión. El presente dictamen es un acto jurídico diverso al recaído al informe presentado por el Partido Revolucionario Institucional relativo a sus gastos de campaña en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, pues en ningún momento se esta reevaluando dicho informe ni se trata de revocar la definitividad de la resolución recaída al mismo.

Al respecto, debe de señalarse el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-013/98, emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en el cual se estableció que:

“... ”

En el caso, cuando el Partido Revolucionario Institucional presentó su informe relativo a los gastos de campaña de mil novecientos noventa y siete, dio cumplimiento tan solo a una importante obligación: Rendir el informe sobre gastos de campaña. Dicho informe es el continente o instrumento formal en el que se plasma cierta información, proporcionada por los mismos partidos políticos, sobre un conjunto de hechos, actos y conductas ocurridos o realizados durante el periodo de que se trate y que constituyen referencias a obligaciones diversas.

El hecho de que el Partido Revolucionario Institucional haya dado cumplimiento a esta importante obligación, no significa que con ello quede liberado de las demás cargas que el sistema de fiscalización le impone, porque el informe sólo sustenta que se han sucedido ciertos hechos, en particular, que se ha gastado determinada cantidad de recursos dentro de una campaña pero no significa que efectivamente así haya ocurrido; por lo que si la autoridad, en ejercicio de sus facultades advierte, dentro de otra fase del proceso de fiscalización, que las obligaciones a cargo de los partidos políticos han sido incumplidas, está autorizada a emitir actos tendentes a inhibir dichas conductas contrarias a las normas, aplicando las sanciones conducentes.

En el problema bajo estudio, cabe señalar que la obligación que impone el artículo 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a que los informes de gastos de campaña deben ser presentados por los partidos políticos, especificando los gastos que en la campaña respectiva haya realizado el partido político, implica que el origen y la integración de la información, que en su momento revisa la autoridad, proviene de los propios partidos políticos, y dicha información es, en principio, de la que parte el Instituto Federal Electoral para la elaboración de sus dictámenes, por lo que la veracidad de lo informado está sujeta a los medios de prueba que, cumpliendo con obligaciones diversas, aporten los mismos partidos políticos, o bien, o en ejercicio de facultades de verificación, y conforme al artículo 49-B, párrafo 2, inciso g), del mencionado Código, ordene la autoridad.

Por otra parte, esta Sala Superior estima que es jurídicamente inaceptable la pretensión del apelante, objeto de este estudio, porque la autoridad, en quien el legislador depositó

la importante función de controlar y vigilar el debido ejercicio de los recursos públicos que al financiamiento de las actividades de los partidos políticos se destina en cada presupuesto, no puede finiquitar, con una sola determinación, cualquier fincamiento de responsabilidad que por transgresiones a la ley incurriera algún partido político, sobre todo cuando la fiscalización en general no ha concluido, por lo que el hecho de que la responsable, mediante el cruce de la información proporcionada por el propio partido político, detecte irregularidades que conforme a la ley son motivo de alguna sanción, no significa en modo alguno que el órgano fiscalizador actúe ilegalmente, sino todo lo contrario, dado que esa autoridad tiene la obligación de velar por el cumplimiento irrestricto de la ley.

En la especie, si la autoridad administrativa decidió no sancionar al Partido Revolucionario Institucional respecto del informe sobre gastos de campaña de mil novecientos noventa y siete presentado dentro de los sesenta días posteriores al cierre de campañas, es porque en ese momento y respecto de ese particular acto, con base en lo informado por el propio partido político y la documentación soporte que fue motivo de análisis, no encontró irregularidades que implicaran violaciones a las disposiciones relativas, por lo que resulta lógico que no se haya aplicado sanción alguna, porque en el momento en que el Partido Revolucionario Institucional rindió su informe sobre dichos gastos, sólo dio cumplimiento a la obligación expresamente impuesta por el artículo 49, párrafo 1, inciso b), fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y si la autoridad estimó que no hubo motivo para sancionar es porque la información revisada, en términos generales, cumplía con lo establecido en las normas correspondientes; en otras palabras, el dictamen calificó particularmente la información y documentación referida en ese informe y no en general el origen, destino y manejo de la totalidad de los recursos de dicho instituto político. En consecuencia, si la autoridad, en ejercicio de una facultad de revisión, en otra fase del proceso de fiscalización, relativo a la revisión del informe anual, encuentra irregularidades concernientes a diversas obligaciones de los partidos políticos, que además están relacionadas con los gastos de campaña, ello es motivo suficiente, en términos de la ley electoral, para que pueda imponer una sanción, ya que el partido político, al presentar información por concepto de gastos de campaña fuera de los términos legales, se colocó en la hipótesis de no reportar en sus informes de campaña la totalidad de los gastos realizados en éstas, incurriendo en incumplimiento de las obligaciones que a su cargo establece el artículo 49-A, párrafo 1, inciso b), fracciones I y III, del multicitado código electoral federal, por lo que también resulta ajustada a derecho la sanción que, en términos del artículo 269, párrafos 1, y 2, incisos a) y b), del referido código, impuso la autoridad responsable.

Esto es así porque una interpretación contraria, como la pretendida por el partido político apelante, tendría como efecto que una determinación de la autoridad administrativa, respecto del cumplimiento de una obligación, excusara a dicho sujeto obligado de otros deberes jurídicos, lo cual es jurídicamente inaceptable, porque el cumplimiento de la ley no puede estar supeditado a una determinación administrativa, máxime cuando dicha determinación versa únicamente sobre los datos conocidos y reportados por el propio partido político en su informe de gastos de campaña, y los efectos de ese dictamen no pueden hacerse extensivos a otras obligaciones a cargo del sujeto pasivo en la relación de fiscalización, porque si así fuera se atentaría abiertamente contra el principio de legalidad, permitiendo que un partido político pudiera realizar conductas indebidas y en su momento informarlas como apegadas a derecho, lo que además atentaría contra los principios de certeza y objetividad, generando condiciones evidentes de ilicitud, que no pueden ser toleradas ni por las normas jurídicas ni por los órganos encargados de garantizar el respeto del Estado de derecho. En esta tesitura, la resolución de la autoridad que se combate, lejos de atentar contra el principio de legalidad y seguridad jurídica, los respeta y, con su actuación, evita precisamente que eventualmente llegaran a violentarse.

Por otro lado, tampoco le asiste la razón al recurrente respecto de que la resolución impugnada implica la revocación del dictamen relativo a su informe de gastos de

campaña y, por tanto, la tesis aislada que cita no resulta aplicable, debido a que la resolución impugnada es un acto jurídico diverso al recaído al informe sobre gastos de campaña y que en manera alguna revoca la definitividad de aquel acto, ya que la autoridad responsable no está volviendo a revisar el informe de gastos de campaña rendido oportunamente, ni la documentación que en ese momento se exhibió como sustento de lo informado, ni mucho menos está reevaluando y, como consecuencia de ello, dejando sin efecto su dictamen, sino que el acto ahora impugnado parte de un hecho novedoso que se desprende o tiene su origen en la documentación presentada en el informe anual y que no corresponde a gastos ordinarios, sino justamente a gastos de campaña. La mención que dicha autoridad hace sobre el informe de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional ya dictaminado es sólo referencial; es decir, sólo sirve de referencia para constatar que un gasto, que por las fechas y las actividades corresponde a las erogaciones de campaña, no aparece reportado, como era obligación del impugnante, en el informe relativo a ese concepto.
...

Al respecto, resulta necesario advertir contundentemente que esta Comisión no esta ejerciendo facultades que le corresponden a la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos pues no va a efectuar la fiscalización de los recursos del Partido Revolucionario Institucional, además de que en modo alguno esta reabriendo el procedimiento de revisión y análisis del informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro. Este Órgano Auxiliar única y exclusivamente se encuentra substanciando un procedimiento de origen distinto al de revisión del mencionado informe, relativo a hechos de los cuales no se tuvo conocimiento durante el procedimiento de revisión y análisis del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro y que pueden representar violaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

A mayor abundamiento, si bien el informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro tiene el carácter de cosa juzgada, dicha situación no limita el derecho que tiene el Partido Acción Nacional para presentar la denuncia sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento que nos ocupa, y menos aún limitan la facultad de esta Comisión de Vigilancia para conocer acerca de dichos hechos, y darle el trámite legal correspondiente a fin de substanciar la mencionada denuncia.

Así, en el presente asunto no se está pretendiendo juzgar al Partido Revolucionario Institucional dos veces por los mismos hechos, ya que en el dictamen y resolución respectiva se analizó la información contable presentada por el Partido Revolucionario Institucional, en lo concerniente a sus ingresos y egresos, situación que es distinta al procedimiento disciplinario que nos ocupa.

4.1 DE LOS ELEMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE

Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento antes mencionado, se pronunciará sobre la veracidad de los hechos denunciados y, en su caso, si los mismos constituyen violaciones a los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente, las pruebas aportadas por cada una de las partes, así como demás diligencias y actuaciones que consten en el mismo.

De igual forma, es de mencionarse que este Órgano Auxiliar no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de denuncia, pues los mismos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, encontrándose facultado para hacer uso de esas atribuciones con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen la función estatal de organizar las elecciones.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio orientador emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual indica:

“ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.—Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de tal procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia.

Recurso de apelación. SUP-RAP-009/2000.—Coalición Alianza por México.—21 de marzo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: David Solís Pérez.

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 178, Sala Superior, tesis S3EL 116/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 806-807.”

Aunado a lo anterior, el procedimiento del cual tiene conocimiento este Órgano Auxiliar es de naturaleza inquisitiva, de tal manera que, presentada la denuncia correspondiente, acompañada de elementos probatorios o de algún principio de prueba, no es indispensable la instancia o conducta impulsora de la parte denunciante, para que la autoridad administrativa electoral realice las diligencias que estime necesarias y recabe mayores elementos de prueba, tendentes a la acreditación de los hechos que motivaron la denuncia.

En tales condiciones, el hecho de que esta Autoridad Electoral en ejercicio de sus atribuciones despliegue las diligencias necesarias y recabe los mayores elementos de prueba, se realiza en observancia a los principios básicos que son el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la normatividad aplicable, los que conducen ineludiblemente a considerar que la investigación iniciada no puede interrumpirse por la falta de elementos para llegar al conocimiento de la verdad de las cosas.

Asimismo, esta Comisión de Vigilancia considera prudente establecer un método a fin de entrar al estudio de la presente denuncia, el cual consistirá en:

- Analizar las pretensiones del promovente y las probanzas que ofreció para acreditar la veracidad de su dicho;
- Analizar las defensas hechas valer por el denunciado y las pruebas aportadas para demostrar la verdad de sus argumentaciones;
- Analizar las pruebas recabadas por este Órgano Auxiliar en ejercicio de su facultad investigadora; y
- La adminiculación de las probanzas con los elementos que obran en el expediente.

Es de señalarse, que la finalidad de la aplicación del respectivo método radica en la obtención de los elementos objetivos necesarios que permitan a los integrantes de este Órgano Auxiliar determinar si el Partido Revolucionario Institucional con los hechos denunciados en su contra cumplió con lo previsto en los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

4.1.1 PRETENSIONES DEL PROMOVENTE Y MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS

En este tenor, de la lectura integral del escrito de denuncia materia del presente dictamen se desprende que el promovente considera que el denunciado incumplió con lo dispuesto por los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en atención a la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge

a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

La litis en el presente asunto, consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres efectuó:

- La aceptación de recursos o apoyos económicos por alguna empresa mercantil;
- Rebasar los límites de las aportaciones;
- Ocultar información sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados; y
- Si estos actos son constitutivos de violaciones a las disposiciones del Código de la materia, como es argumentado en el escrito inicial de denuncia.

Al efecto, el denunciante con la finalidad de probar los hechos expresados en su escrito de denuncia ofreció y aportó los siguientes medios de prueba:

- 1) Un audio casete;
- 2) Tres notas periodísticas;
- 3) Copia certificada del oficio número IEE/DPPM/457/04 de fecha nueve de julio de dos mil cuatro signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado;
- 4) Copia certificada del formato número “XVI” de fecha catorce de enero de dos mil cinco;
- 5) Copia certificada del formato número “XVII” de fecha catorce de enero de dos mil cinco;
- 6) Copia certificada del informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación derivado del examen al Informe de gastos de campañas, el cual incluye el origen y destino de la ministración bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto, así como del financiamiento privado del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, identificado con el número DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05;
- 7) Copia certificada del informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro; y
- 8) Copia certificada del “Dictamen de la Comisión Revisora, en relación con el informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General de este Organismo,

bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Estatal Electoral Ordinario 2004”.

De igual forma, la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 fracciones II y IV del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado requirió diversa información relacionada con los hechos denunciados, siendo los siguientes:

- *Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

- Al Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado para que informara sobre la existencia de algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.
- Al Jefe del Servicio de Administración Tributaria con la finalidad que informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
- Al Secretario de Hacienda y Crédito Público con el objeto que informara respecto a las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha
- Al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que informara sobre la existencia de algún registro patronal a nombre del C. Kamel Nacif Borge, así como si el C. Amin Farjat o Amin Farjad cuenta con registro de alta como trabajador o empleado de alguna empresa y en caso de ser así el nombre de dicha empresa.
- Al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla se le solicitó comunicara si dentro del Registro de Sociedades figura el C. Kamel Nacif Borge en calidad de socio.
- Al Director de W Radio para que informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la

cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

- Al Director General del Periódico Digital e-consulta para que comunicara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT” publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A los Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna con el fin de que informaran si contaban en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Kamel Nacif apoyó campaña de Marín” publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- Al Director de la Jornada de Oriente para que informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “EL IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín” publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado durante el

Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

- Al Director General del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Puebla con el fin de que solicitara a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
- A la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación de este Instituto para que informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral y remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.

Dichos medios de prueba serán valorados de conformidad con lo dispuesto por los artículos 356, 357, 358, 359 y 360 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como los diversos 24, 25, 26, 27 y 28 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, los cuales refieren:

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

“ARTÍCULO 356.- El que afirma está obligado a probar. El que niega también lo estará, si su negación contiene una afirmación. Sólo los hechos se prueban, no así el derecho.

ARTÍCULO 357.- En materia electoral serán admitidas las pruebas documentales, las pruebas técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento y las presuncionales.

Las pruebas deberán ser ofrecidas al presentarse el escrito del recurso; en

caso contrario, no serán tomadas en cuenta, con excepción de las pruebas supervinientes.

ARTÍCULO 358.- Las pruebas serán:

I.- Documentales Públicas:

a) Los documentos que expidan los órganos o funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones;

b) Los documentos que expidan las demás autoridades federales, estatales o municipales, de conformidad con la competencia que la Ley les confiere; y

c) Los documentos realizados por quienes se les confiere fe pública y en los que consten hechos que les sean propios.

II.- Documentales privadas, aquellas que no se encuentran contempladas en la fracción anterior, que sean ofrecidas por las partes y sean correspondientes;

III.- Las pruebas técnicas son aquellos medios de producción de imagen y sonidos. El oferente deberá señalar concretamente y por escrito el hecho que intenta probar y las circunstancias de modo, tiempo y persona que se aprecian en la prueba; y

IV.- La Presuncional, que es la deducción que realiza el resolutor partiendo de hechos probados para llegar a la verdad.

ARTÍCULO 359.- Harán prueba plena las documentales públicas. En su caso, se admitirá prueba en contrario.

Tendrán el valor de presunción las documentales privadas y las pruebas técnicas y admitirán prueba en contrario. Harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 360.- Para la admisión y desahogo de pruebas que no se encuentran contempladas en el presente ordenamiento y que fueran ofrecidas por el recurrente, el Tribunal deberá considerar si la prueba es conducente, si no se vulneran los plazos legales fijados para la resolución de los asuntos que son competencia del organismo jurisdiccional electoral y las posibilidades materiales.”

Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

“ARTÍCULO 24.- El que afirma está obligado a probar. El que niega también lo estará, si su negación contiene una afirmación. Sólo los hechos se prueban, no así el derecho.

ARTÍCULO 25.- En materia electoral serán admitidas las pruebas documentales, las pruebas técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento y las presuncionales.

Las pruebas deberán ser ofrecidas al presentarse la denuncia; en caso contrario, no serán tomadas en cuenta, con excepción de las pruebas supervinientes.

ARTÍCULO 26.- Las pruebas que podrán presentarse serán las siguientes:

I.- Documentales Públicas:

- a) Los documentos que expidan los órganos o funcionarios electorales en ejercicio de sus atribuciones;
- b) Los documentos que expidan las demás autoridades federales, estatales o municipales, de conformidad con la competencia que la Ley les confiere; y
- c) Los documentos realizados por quienes se les confiere fe pública y en los que consten hechos que les sean propios.

II.- Documentales privadas, aquellas que no se encuentran contempladas en la fracción anterior, que sean ofrecidas por las partes y sean correspondientes al hecho que intenta probar;

III.- Las pruebas técnicas son aquellos medios de producción de imagen y sonidos. El oferente deberá señalar concretamente y por escrito el hecho que intenta probar y las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona que se aprecian en la prueba; y

IV.- La Presuncional, que es la deducción que realiza el resolutor partiendo de hechos probados para llegar a la verdad.

ARTÍCULO 27.- Harán prueba plena las documentales públicas. En su caso, se admitirá prueba en contrario.

Tendrán el valor de presunción las documentales privadas y las pruebas técnicas y admitirán prueba en contrario. Harán prueba plena cuando al relacionarlas con los demás elementos que obren en el expediente no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

ARTÍCULO 28.- Para la admisión y desahogo de pruebas que no se encuentran contempladas en el presente Reglamento y que fueran ofrecidas por el denunciante, la Comisión deberá considerar si la prueba es conducente, la posibilidad y las condiciones materiales para su desahogo.

En el análisis y valoración de dichas pruebas deberá de tomarse en cuenta lo señalado por el artículo inmediato anterior de este Reglamento.”

4.1.2 DEFENSAS DEL DENUNCIADO Y MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS

Por su parte, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado José Porfirio Alarcón Hernández, al dar contestación en tiempo y forma legal a la denuncia presentada por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional manifestó que los hechos que dan origen a la denuncia de mérito provienen de una grabación de audio difundida en un programa noticioso, sin que se señale en el escrito de denuncia si alguna autoridad Judicial Federal a petición de la autoridad federal que faculte la Ley o del titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente autorizó la intervención de dicha comunicación privada, si la autoridad competente por escrito, fundó y motivó las causas legales de la solicitud de intervención y si la autoridad competente expresó el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración, por lo que ante la ausencia de justificación de haber sido cubiertos los extremos constitucionales para intervenir una comunicación privada debe concluirse que la grabación fue obtenida por medios ilícitos, refiriendo que por lo anterior la grabación adolece de toda legitimidad, por su origen violatorio de normas constitucionales y, en consecuencia, carece de toda fuerza probatoria para fundar la causa que se intenta, así como para justificar los hechos denunciados.

De igual forma, es de señalarse que el denunciado no aportó medio de prueba alguno para desvirtuar los hechos imputados en su contra.

4.1.3. LA ADMINICULACIÓN DE LAS PROBANZAS CON LOS ELEMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.

Una vez analizados los escritos de denuncia y contestación de la misma, a fin de continuar con el estudio de mérito corresponde entrar al análisis y valoración de las probanzas aportadas por el denunciante en el presente procedimiento, con el objeto de verificar si con la misma se acredita o no el dicho del promovente y, en su caso, si los hechos denunciados son violatorios de los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, como lo argumenta el denunciante.

Esto es, determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres incurrieron en la aceptación de recursos o apoyos económicos por alguna empresa mercantil, si rebasó los límites de las aportaciones y si ocultó información sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados y si estos actos son constitutivos de violaciones a las disposiciones del Código de la materia.

A. MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

En este entendido, por lo que respecta a los medios probatorios aportados por el denunciante, esta Autoridad Auxiliar procederá al análisis de cada uno de ellos, siendo los siguientes:

1) AUDIO CASETE

El Partido Acción Nacional con la finalidad de probar su dicho presentó como medio de prueba un audio casete, que de conformidad con los artículos 358 fracción III, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción III y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerada como una prueba técnica, la cual tendrá el valor de presunción. El contenido de dicho audio casete fue certificado por el Secretario General de este Instituto tal y como se refiere en los antecedentes de este dictamen. En este sentido, de la reproducción del audio casete se advierten las siguientes conversaciones:

Medio	Radio
Duración	39 "
Audio	
LOCUTOR VOZ EN OFF	
Voz masculina 1. Marín uno, Voz masculina 2. Dígame usted Voz masculina 1. ¿Cuántas tiene usted camisetas tenemos en crudelio? Voz masculina 2. ¿En crudelio? como cuarenta y cinco, ah perdón treinta y c, estaba yo en el.... (corte) Voz masculina 2.davía como sesenta señor Voz masculina 1. ¿Cuánto? Voz masculina 2. Como sesenta mil camisetas Voz masculina 1. Aparte de las que te die.. Voz masculina 2. Aparte de sí, lo de ya yo no cuento lo de los candidatos, eso ya Voz masculina 1. ¿Son sesenta mil de Marín, treín treinta mil de Marín, sesenta mil de González y te sobran otros sesenta mil? Voz masculina 2. Siip Voz masculina 1. ¿Sabes que? Voz masculina 2. Dígame Voz masculina 1. Necesitamos chingarnos esos sesenta mil para el cierre de campaña de Marín. (corte)	

Medio	Radio
Duración	39 "

Audio
LOCUTOR VOZ EN OFF
Voz Masculina 1. Marín uno
Voz masculina 2. Dígame uste
Voz masculina 1. ¿Cuántas tiene uste camisetas tenemos en crudelio?
Voz masculina 2. ¿En crudelio? Como cuarenta y cinco, ah perdón treinta y c, estaba yo en el...de Mariano, tengo todavía como sesenta señor
Voz masculina 1. ¿Cuánto?
Voz masculina 2. Como sesenta mil camisetas
Voz masculina 1. Aparte de las que
Voz masculina 2. Aparte de sí, lo de ya yo no cuento lo de los candidatos, eso ya
Voz masculina 1. ¿Son sesenta mil de Marín, treín treinta mil de Marín, sesenta mil de González y te sobran otros sesenta mil?
Voz masculina 2. Siip
Voz masculina 1. ¿Sabes que?
Voz masculina 2. Dígame
Voz masculina 1. Necesitamos chingarnos esos sesenta mil para el cierre de campaña de Marín.
(corte)

Sobre el contenido del presente medio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado en reiteradas ocasiones que las pruebas técnicas debe ser tratado con mucho rigor y con sumo cuidado porque derivado de los avances técnicos actuales puede editarse con relativa facilidad, por lo que ese tipo de pruebas son un mero indicio, que debe estar robustecido y adminiculado con pruebas fehacientes para comprobar los hechos respectivos. Situación que adolece en la prueba técnica aportada por el Partido Acción Nacional pues la grabación aportada se encuentra editada, de ahí que sólo pueda dársele un valor de indicio, el cual para generar convicción, tendría que estar adminiculado con alguna o algunas otras pruebas fehacientes, que robustecieran su contenido.

En efecto, aún cuando el promovente aporta diversas notas periodísticas en relación con la aludida grabación con la finalidad de robustecer su dicho debe considerarse que las mencionadas notas periodísticas en términos de los criterios orientadores y jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hacen prueba fehaciente aportando sólo indicios respecto de los actos denunciados, en el presente caso respecto a la supuesta existencia de aportaciones a la campaña electoral del candidato a Gobernador del Estado en el año dos mil cuatro del Partido Revolucionario Institucional, por lo que el audio casete, por sí mismo, carece de valor probatorio alguno. De igual forma, debe señalarse que el promovente no aporta elementos de convicción que permitan asegurar que las personas mencionadas en las grabación sean efectivamente las señaladas en el escrito de denuncia del Partido Acción Nacional.

En relación con lo anterior resulta aplicable al caso el criterio orientador sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro de la resolución identificada con el número SUP-JRC-244/2007, el cual refiere:

“... ”

En primer lugar, ya se vio que la responsable no desestimó en forma aislada las probanzas, concretamente las notas periodísticas, y por lo que se refiere a las otras dos pruebas, dicha responsable dijo que, el disco compacto de referencia, tenía la valoración de que no hacía prueba alguna porque, dado el avance de la tecnología, era fácilmente manipulable y podía ser editado y que las denuncias penales, tenían que ver con hechos ocurridos con anterioridad a la presentación de la queja ante el consejo, por lo que no podían tomarse en cuenta.

Sobre el particular, en cuanto al contenido de la prueba técnica, efectivamente, tal como lo señaló la responsable, esta Sala Superior ha considerado en reiteradas ejecutorias que, las pruebas técnicas, concretamente un disco compacto, debe ser tratado con mucho rigor y con sumo cuidado porque, por los avances técnicos actuales, puede editarse con relativa facilidad, por lo que ese tipo de pruebas son un mero indicio, que debe estar robustecido y adminiculado con pruebas fehacientes para comprobar los hechos respectivos.

De ahí que, como lo sostuvo la responsable, al disco compacto de mérito sólo podía dársele el valor de indicio, el cual para generar convicción, tendría que estar adminiculado con alguna o algunas otras pruebas fehacientes, que robustecieran su contenido.

En el caso, según el actor, las pruebas fehacientes que robustecen el contenido de la prueba técnica de referencia son las notas periodísticas, pero como ya se vio que dichas notas no son prueba fehaciente, que evidencien la compañía de desprestigio a que se refiere el actor, el disco, por sí mismo, carece de valor probatorio alguno.

“... ”

Ahora bien, al aportar dicho medio de prueba, el Partido Acción Nacional no refiere los medios a través de los cuales obtuvo la grabación de las conversaciones contenidas en el audio casete presentado por dicho instituto político, refiriendo únicamente que la misma proviene de un programa de radio.

En este sentido, a fin de analizar dicho medio probatorio debe considerarse lo dispuesto en el artículo 16, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se dispone:

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.”

Como se puede apreciar de la transcripción efectuada, una comunicación privada es en principio inviolable y solamente la Autoridad Judicial Federal podrá autorizar su intervención mediante la acreditación de los siguientes requisitos:

- a) Que sea solicitada por la Autoridad Federal facultada para ello o por el titular del Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente;
- b) Que se funden y motiven las causas legales de la solicitud;
- c) Que se especifique el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; y
- d) Que no se trate de comunicaciones privadas en materia electoral, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la intervención de las mismas, por lo que ni la Autoridad Judicial Federal puede autorizar una intervención en esta materia.

En este orden de ideas, en el expediente integrado con motivo de la denuncia de mérito no se encuentra algún elemento objetivo que de la certeza a esta Autoridad Electoral de que la grabación que anexa el Partido Acción Nacional y que de acuerdo con su dicho se hizo pública el día dieciocho de septiembre de dos mil seis a través de W Radio en el noticiero conducido por Carmen Aristegui haya sido obtenida de acuerdo con los parámetros constitucionales citados anteriormente, pues no existe evidencia de que la forma en que se obtuvo la mencionada grabación y además al tratarse de un asunto relacionado con la materia electoral se tiene la certeza de que no pudo estar autorizada por una Autoridad Judicial Federal pues no tiene atribuciones constitucionales o legales para hacerlo.

Por lo que, esta Autoridad Electoral no tiene la certeza de que la grabación que contiene la conversación en la que constan los hechos puestos a su consideración fuera obtenida con apego a las disposiciones constitucionales mencionadas, ya que no cuenta con los elementos probatorios que acrediten tal hecho, por lo tanto carece de todo valor probatorio.

Lo anterior, se determina tomando en consideración que el mencionado artículo 16 Constitucional establece puntualmente que los resultados de las intervenciones que no cumplan con los requisitos previstos en dicho numeral carecerán de todo valor probatorio.

En este tenor de ideas, debe mencionarse que las limitaciones al ejercicio del derecho probatorio implican sujetar al principio de legalidad la disciplina probatoria, esto es, la admisión y exclusión de los elementos probatorios se encuentran sujetas a reglas que garantizan la legalidad y ello incluye también la

sujeción de la obtención de las pruebas en la investigación de los hechos a reglas claras, aunque esto pueda llegar a implicar algún tipo de sacrificio en cuanto a la búsqueda de la verdad material ante la consecuencia de no poder ser tomadas en cuenta las pruebas que se cataloguen de ilícitas, como lo serían aquellas obtenidas vulnerando derechos individuales fundamentales como el de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Resulta aplicable al caso las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto refieren:

“Localización: Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Abril de 2008

Página: 6

Tesis: P. XXXIII/2008

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAS GRABACIONES DERIVADAS DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA CONSTITUYEN PRUEBAS ILÍCITAS QUE POR MANDATO EXPRESO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CARECEN DE TODO VALOR PROBATORIO.

En los párrafos noveno y décimo del citado precepto constitucional se establece el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que únicamente la autoridad judicial federal podrá autorizar su intervención, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, en la inteligencia de que esas autorizaciones no podrán otorgarse cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor y que los resultados de cualquier intervención autorizada que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe estimarse que el Poder Reformador de la Constitución consignó la prevalencia, en todo caso, del referido derecho fundamental sobre el derecho de defensa y de prueba garantizados en los artículos 14 y 17 de la propia Constitución, prerrogativas que se encuentran sujetas a limitaciones establecidas para sujetar al principio de legalidad la disciplina probatoria y para garantizar que la actividad jurisdiccional se lleve a cabo en estricto cumplimiento al marco constitucional y legal aplicable, por lo que cualquier grabación derivada de la intervención de una comunicación privada que no se haya autorizado en términos de lo establecido en el artículo 16 constitucional constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio.

Facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales 2/2006*. Solicitantes: Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. 29 de noviembre de 2007. Mayoría de ocho votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Genaro David Góngora Pimentel. Dictaminador: Juan N. Silva Meza. Encargado del engrose: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XXXIII/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil ocho.

*Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 2/2006, integrado con motivo de las solicitudes formuladas por las Cámaras

de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para investigar violaciones graves de garantías individuales.”

“Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de 2000

Página: 428

Tesis: 2a. CLXI/2000

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE.

El artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son inviolables; que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada; que dicha petición deberá ser por escrito, en la que se funden y motiven las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; y que no se podrán otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. El párrafo décimo de dicho numeral señala que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes, y que los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Ante ello, debe estimarse que fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y, en contrapartida, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional; por ende, si dentro de un juicio civil, en cualquiera de sus especies, una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que en sí mismo es ilícito.

Amparo en revisión 2/2000. Norma Angélica Medrano Saavedra. 11 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas López.”

Bajo este contexto, toda prueba que sea ilegal desde su origen no tendrá validez alguna, es decir, es nula e inadmisibles como medio para sustentar la denuncia del Partido Acción Nacional. Sin embargo, considerando que para la procedencia de una denuncia no se debe exigir un principio de prueba o indicio respecto de todos y cada uno de los hechos que sustenta, sino que deben de bastar elementos indiciarios referentes a algunos que hagan creíble el conjunto y puedan servir de base para iniciar y continuar la averiguación y con independencia del medio por el que se tuvo conocimiento de la supuesta violación a las disposiciones del Código Comicial, este Órgano Auxiliar se encuentra obligada a investigar la veracidad de estos hechos, por todos los medios a su alcance

siempre que no sean contrarios a la moral y al derecho atendiendo a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estimando oportuno considerar el contenido de la aludida grabación como una hipótesis por dilucidar, a efecto de determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió informar sobre los recursos obtenidos en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro sin que por este hecho se le asigne algún valor probatorio a la aludida grabación.

2) NOTA PERIODÍSTICA DE E-CONSULTA

Por lo que respecta a la nota periodística aportada por el promovente publicada en el diario digital e-consulta en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, la Secretaría General de este Organismo dio constancia que la nota antes transcrita fue publicada en la página de Internet <http://www.e-consulta.com>, esto con la finalidad de atender la solicitud realizada por el denunciante.

Ahora bien, dicha nota periodística señala:

“Exhorta Congreso a IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT

La Comisión Permanente del Congreso del estado aprobó por unanimidad este día un exhorto para que el Instituto Estatal Electoral realice una investigación sobre el financiamiento que recibió el PRI durante el 2004, esto luego de que se difundiera que el empresario libanés Kamel Nacif Borge entregó apoyos en especie con un monto de hasta 1.5 millones de pesos al candidato del tricolor a la gubernatura Mario Marín Torres.

La propuesta fue presentada por el diputado local del PAN, Raymundo García García, según se difundió en Oro Noticias, conducido por el periodista Iván Mercado.

En tanto, el diputado local del PRD Rodolfo Huerta Espinosa indicó que el IEE tiene la facultad de revisar los gastos de campaña del PRI de la pasada contienda electoral pese a que el presidente de dicho organismo, Alejandro Necoechea, lo haya negado.

Indicó que también acudirán al Tribunal Estatal Electoral para que investigue el presunto financiamiento irregular de Kamel Nacif a la campaña de Mario Marín, además de que presentarán una propuesta para que el Congreso del estado revise las cuentas y gastos efectuados por el tricolor.

Por su parte, la diputada priísta Claudia Hernández consideró que la petición de la fracción del PAN no procederá porque la elección del 2004 ya fue calificada y analizadas por todas las instancias correspondientes.

Kamel aportó 1.5 mdp a la campaña de Marín (20/09/2006)

Durante su campaña como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales unos 1.5 millones fueron aportados en especie por el empresario libanés Kamel Nacif Borge, lo cual viola el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Luis Ángel Casas Arellano, ex tesorero del Comité de Financiamiento de la campaña de Marín Torres, informó el 2 de septiembre de 2004 que el gasto total destinado para el proselitismo a favor del entonces candidato priísta sería inferior a 12 millones de pesos y una tercera parte —4 millones— de ese dinero provendría del sector privado.

Entre la lista de empresarios que financiaron la campaña del gobernador revelada por Casas Arellano no figuró Nacif Borge. No obstante, el denominado “Rey de la Mezclilla”

aportó más de 100 mil playeras al candidato Mario Marín Torres que superarían el millón de pesos, al estimar un costo unitario de entre 10 y 15 pesos, de acuerdo con textileros consultados.

De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla un particular tiene permitido aportar en especie hasta el 10 por ciento de las prerrogativas que el IEE entrega anualmente a los partidos políticos. En 2004, el organismo destinó más de 8.3 millones al PRI. Esto significa que lo aportado por Kamel Nacif apenas debía rebasar los 800 mil pesos. Sin embargo, su aportación se estima fue entre un millón y 1.5 millones.

Las nuevas grabaciones.

Por la mañana de ayer, la periodista Carmen Aristegui difundió en su noticiario transmitido por W Radio el contenido de una conversación que Nacif Borge sostuvo con un empleado suyo, en la que le ordena la inmediata impresión de 60 mil playeras a favor del ex candidato priísta, sumadas a otras miles ya almacenadas:

Kamel Nacif (KN): ¿Cuántas pinches camisetas tenemos en crudelio?

2ª voz: “En crudelio tenemos como 45, ay perdón, pendejo, estoy pensando en lo de Mariano, tengo todavía como 60 señor.

KN: ¿Cuánto?

2ª voz: Como 60 mil camisetas

KN: Aparte de las de Marín...

2ª voz: Aparte de las de Marín, yo ya no cuento lo de los candidatos.

KN: Son 60 mil de Marín, más 30 mil de Marín, 60 mil de González, y te sobran como 60 mil, sabes qué, necesitamos chingarnos esas 60 mil para el cierre de campaña de Marín.

La violación

En el artículo 48 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla se establece que “Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en dinero de militantes y/o de simpatizantes, por una cantidad superior al diez por ciento del monto del financiamiento público para actividades ordinarias.

“De las aportaciones en dinero los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se harán constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, siempre y cuando no implique venta de bienes o artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables”.

Las playeras de Marín, comunes en la Sierra Negra

Martín Barrios Hernández, representante de la Red de Derechos Laborales del Valle de Tehuacán y galardonado con la medalla “Emilio Krieger” por su labor como activista, recordó que en la región de la Sierra Negra, principalmente en los municipios de Tehuacán y Ajalpan, abundan las playeras que regaló Marín Torres durante su campaña.

Por su bajo nivel económico, los pobladores utilizan frecuentemente los artículos publicitarios distribuidos por el equipo de campaña de Marín Torres.

Precisó que en las maquilas de la zona —eminentemente manufacturera y donde Kamel Nacif aún tiene inversiones—, Marín Torres intensificó su campaña en 2004 y emisarios de él promovieron el voto a favor del PRI al interior de fábricas, principalmente en Confecciones Carvajal Cobo.

Como parte de esa campaña, se regalaron las playeras del ex candidato a gobernador.

Exigen perredistas elección “legítima” de consejeros electorales

Unas ocho personas que dijeron ser integrantes de la coalición Por el Bien de Todos, encabezados por Alejandro del Castillo, Norberto Amaya y Luís Ortega Morales se manifestaron durante la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso del Estado para exigir que la Comisión Especial que emitirá la convocatoria y seleccionará a los próximos consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) sea legítima y no por imposiciones, pues la mayoría de los diputados que la integran son priístas. Los militantes del Partido Revolucionario Institucional protestaron para que no haya favoritismos ni dedazos dentro de la Comisión Especial, pues aseveraron que debe haber respeto a la elección de los consejeros y legitimidad en los procesos electorales. Ayer quedó integrada la comisión especial que organizará la elección del nuevo consejo del IEE, pero los diputados independientes fueron excluidos, esto generó molestia entre los legisladores del PAN y PRD, quienes manifestaron que es un error del PRI pretender mayoritar la elección del nuevo consejo electoral. La diputada local independiente, Leticia Jasso Valencia, señaló que pese a que no pertenece a ninguna fracción parlamentaria tiene los mismos derechos que cualquier otro legislador, por lo que, lamentó que los diputados independientes no hayan sido considerados para formar parte de la comisión especial. Recordó que existen muchos legisladores, quienes ya pertenecen alguna comisión, y aunque reconoció que no duda de la capacidad de sus compañeros, dijo que desconfía en la equidad de cómo se está dando la distribución en las diferentes comisiones. Pese a no haber sido tomada en cuenta para ser representante en la comisión especial, rechazó la posibilidad de integrarse a otra fracción parlamentaria en este momento, pero no descartó adherirse más adelante, "lo analizaré", puntualizó. *(Con información de América Farías Ocampo)*

En este sentido, dicha probanza en términos de los artículos 358 fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción II y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerada como una documental privada, misma que tiene el valor de presunción admitiendo prueba en contrario y sólo hará prueba plena, cuando al relacionarlo con los demás elementos que obren en el expediente, no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

Así, de dicha nota se desprende las opiniones de un medio de comunicación respecto a:

- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que el Instituto Estatal Electoral realizara una investigación sobre el financiamiento que recibió el Partido Revolucionario Institucional durante el año dos mil cuatro.
- La supuesta aportación de un millón y medio de pesos en especie por parte de Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional.
- Que entre la lista de empresarios que financiaron la campaña del gobernador revelada por Casas Arellano no figuró Nacif Borge. No obstante, el denominado "Rey de la Mezclilla" aportó más de 100 mil playeras al candidato Mario Marín Torres que superarían el millón de

pesos, al estimar un costo unitario de entre 10 y 15 pesos, de acuerdo con textileros consultados.

- La nota que la periodista Carmen Aristegui difundió en su noticiario transmitido por W Radio relativo al contenido de una conversación que Kamel Nacif Borge sostuvo con un empleado suyo en la que le ordena la inmediata impresión de 60 mil playeras a favor del ex candidato priísta, sumadas a otras miles ya almacenadas.
- Que la nota transmitida en W Radio fue transmitida “por la mañana de ayer”, por lo que atendiendo a que la nota es de fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, la fecha en que se transmitió sería el veinte de septiembre de dos mil seis.

Sin embargo, aún cuando se observan éstos elementos al adminicular la presente nota periodística con algún otro elemento de prueba no se acredita que la conversación se realizó entre las personas mencionadas por el Partido Acción Nacional en su escrito de denuncia, así como la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho, procediendo posteriormente a su análisis en conjunto con las demás notas periodísticas aportadas por el promovente.

Cabe indicar, que el promovente al aportar el presente medio de prueba refiere que el Código de la materia indica que “un particular tiene permitido aportar en especie hasta el 10 por ciento de las prerrogativas que el IEE entrega anualmente a los partidos políticos”, situación que es incorrecta pues en términos del numeral 48 fracción II inciso c) del citado Código las aportaciones que en dinero realice cada persona físico o moral facultada para ello tendrá un límite equivalente al 0.05% del monto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos políticos en el año que corresponda.

3) NOTA PERIODÍSTICA DE LA JORNADA DE ORIENTE

Por lo que respecta a la nota periodística aportada por el promovente publicada en el periódico La Jornada de Oriente de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, la Secretaría General de este Organismo dio constancia que la nota antes transcrita fue publicada en la página de Internet www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.phpes, esto con la finalidad de atender la solicitud realizada por el denunciante.

Ahora bien, dicha nota periodística señala:

“El IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín

Lesly Mellado May

El consejo general del Instituto Electoral del Estado (IEE) podría desechar el exhorto de la comisión permanente del Congreso del Estado para que se investiguen las presuntas donaciones del textilero Kamel Nacif Borge a la campaña del hoy gobernador Mario Marín Torres durante el año 2004.

Los consejeros electorales concluyeron la segunda mesa de trabajo sobre el asunto Nacif-Marín en el IEE. En la imagen, de izquierda a derecha, Pascual Urbano, Miguel A. Flores, un asistente y Mario Alonso Iglesias / Foto: José Castañares

De acuerdo con opiniones de algunos consejeros y representantes de partidos políticos en el organismo electoral, el exhorto podría ser desechado porque el secretario general del Congreso, Jorge Mora, no envió los documentos “claros”.

El exhorto para la investigación fue aprobado por unanimidad en una sesión pública de la comisión permanente el pasado 21 de septiembre, pero Mora remitió al IEE documentación donde únicamente se asienta que fue un punto de acuerdo presentado por la bancada del PAN.

Y aunque el organismo electoral le pidió aclarar el asunto, el funcionario del Congreso envió nuevamente un documento ambiguo, un acta de la sesión donde no se registró la votación que obtuvo unanimidad de la comisión permanente, incluso el voto de los diputados priistas.

Así, en dos ocasiones Mora mandó al IEE documentos que ocultan la decisión de la comisión permanente.

A pesar de que la sesión de la permanente fue pública y la votación del exhorto (aprobado por unanimidad) difundida por los medios de comunicación y por la página web oficial del Congreso, para el IEE “lo oficial” es que fue un punto de acuerdo exclusivo de los diputados albiazules.

Hugo Aguilar, representante del PRD en el organismo electoral dice que el exhorto para investigar las presuntas donaciones de Nacif a Marín “no reúne los requisitos”. Además que el IEE es un organismo autónomo que no está obligado a atender a ningún poder, en este caso, al Legislativo.

Si bien considera que sí se debe investigar la entrega de playeras de Nacif al hoy gobernador, dijo que los panistas erraron el camino al promover el exhorto del Congreso local.

Durante la mesa de trabajo realizada ayer y a una semana de dejar el cargo, los consejeros electorales coincidieron en que no pueden atender el exhorto de una bancada del Congreso, basados en la “información oficial”, por lo que varios opinaron que lo mejor es desecharlo.

No son tácticas dilatorias: Necoechea

“Sí hemos estado trabajando”, “No ha habido pasividad”, “No son tácticas dilatorias”, “No digan que mandamos el exhorto a dormir el sueño de los justos”, “De veras que sí estamos trabajando y le voy a enseñar los papeles”, estas fueron algunas frases soltadas ayer por el consejero presidente del IEE, Alejandro Necoechea.

Tras concluir la mesa de trabajo (la segunda en un mes) sobre el asunto Nacif-Marín, el funcionario dijo que el secretario general del IEE, Julián Corona, realizará el análisis sobre la viabilidad de la petición.

Explicó el enredo burocrático generado por el secretario general del Congreso, Jorge Mora, y dijo que él ha insistido en que le envíe la documentación que permita al IEE tomar una decisión. Con papeles en mano mostró que no está asentado si el exhorto fue de la comisión permanente o sólo un punto de acuerdo presentado por los diputados del Partido Acción Nacional.

Entonces ¿el secretario del Congreso cometió un error?, se le preguntó. “No lo sé”, se encogió de hombros Necoechea y justificó: “No crean que son tácticas dilatorias, eh, yo sí he trabajado, vean cómo solicité de inmediato toda la información”.

Sobre el día en que estará listo el análisis del secretario general del IEE, para saber si habrá o no investigación, el funcionario dijo que “no hay fecha”.

De acuerdo con la versión de los representantes de los partidos políticos de oposición hay una tendencia de los consejeros a desechar el exhorto y decir no a la investigación. Sería, tal vez, la última acción para no heredar el conflicto al nuevo consejo.

Camisetas para Mario Marín

La investigación solicitada por el Congreso tuvo su origen en unas conversaciones telefónicas reproducidas el pasado 18 de septiembre, por W-Radio en el noticiero conducido por Carmen Aristegui, donde Kamel Nacif habla sobre la campaña de Marín: “60 mil camisetas de Marín, más 30 mil de Marín, 60 mil de González, y te sobran como 60 mil para el cierre de campaña de Marín”.

“(...) En esta conversión queda en entredicho un aporte económico en especie por parte de Kamel Nacif al entonces candidato a gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, de más de 100 mil playeras para campañas políticas, de las cuales no se refiere si fueron vendidas o donadas”, reza el punto de acuerdo promovido por los diputados panistas y avalado por unanimidad en la comisión permanente del Congreso, hace más de un mes.”

Dicha probanza en términos de los artículos 358 fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción II y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerada como una documental privada, misma que tiene el valor de presunción admitiendo prueba en contrario y sólo hará prueba plena, cuando al relacionarlo con los demás elementos que obren en el expediente, no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

Así, de dicha nota se desprende la opinión de un medio de comunicación respecto a lo siguiente:

- Al análisis que el Instituto Electoral del Estado efectuaba sobre el exhorto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado para que se realizara una investigación sobre el financiamiento que recibió el Partido Revolucionario Institucional durante el año dos mil cuatro.

- Que el origen de dicho exhorto fueron las conversaciones telefónicas reproducidas el dieciocho de septiembre de dos mil seis por W-Radio en el noticiero conducido por Carmen Aristegui, donde Kamel Nacif habla sobre la campaña de Marín.

Sin embargo, aún cuando se observan éstos elementos al adminicular la presente nota periodística con algún otro elemento de prueba no se acredita que la conversación se realizó entre las personas mencionadas por el Partido Acción Nacional en su escrito de denuncia, así como la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho, procediendo posteriormente a su análisis en conjunto con las demás notas periodísticas aportadas por el promovente.

4) NOTA PERIODÍSTICA DE LA QUINTA COLUMNA

Por lo que respecta a la nota periodística aportada por el promovente publicada en el diario digital La Quinta Columna, la Secretaría General de este Organismo certificó que la nota antes transcrita fue publicada en la página de Internet http://www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/política/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, esto con la finalidad de atender la solicitud realizada por el denunciante.

Ahora bien, dicha nota periodística señala:

“ Kamel Nacif apoyó campaña de Marín

Aparece una grabación más que conecta al empresario y al gobernador

Efraín Núñez

La periodista Carmen Aristegui dio a conocer ayer dos nuevas grabaciones en las que se evidencia el apoyo en 2004 del empresario Kamel Nacif a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres. El nuevo material de audio fue publicado por Aristegui a nivel nacional en su programa radiofónico de W Radio, misma frecuencia en la que se difundió el célebre audio del “Góber Precioso.”

Después de las 7 de la mañana, previo a la deliberación de la Corte respecto de la propuesta de dictamen presentada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia —mismo que exoneraba a Marín— y luego de conocerse el despliegado de Kamel Nacif en el que reconoce haber tenido las conversaciones que fueron difundidas en los medios de comunicación, Aristegui presentó un par de audios en el que aparecen entre otros, los nombres de Valentín Meneses Rojas, —ex director de Prensa y Propaganda del PRI estatal—, Jorge Mendoza Velarde —ex secretario de Finanzas del PRI estatal— así como del empresario tehuacanense de apellido Farjat.

En la grabación se habla de un apoyo de al menos 90 mil playeras con la leyenda “Marín Gobernador” que al parecer fueron utilizadas en el cierre de campaña del actual mandatario poblano. CAMBIO reproduce la versión estenográfica del material, mismo que presenta fallas de origen:

Grabación 1:

Sonido de marcado de teléfono
 Kamel Nacif (KN): Ponme a Amin Farjat...
 Inaudible
 Farjat (F): Bueno.
 KN: Que pasó
 F: Que tal señor buenos días.
 KN: ¿Cuántas camisetas tenemos en ... (Inaudible)
 F: Como 45, a perdón (Inaudible) tenemos todavía como 60 señor.
 KN: ¿Cuántas?
 F: Como 60 mil camisetas
 KN: A parte de las que te di.
 F: Yo ya no cuento lo de los candidatos.
 KN: Van 60 mil de Marín, 30 mil de Marín, 60 mil de Gonzáles y ¿te sobran otras 60 mil?
 F: Si.
 KN: ¿Sabes que?
 F: Dígame.
 KN: Necesitamos chingarnos esas 60 mil para el cierre de campaña de Marín.
 F: Entonces ahorita las voy a ordenar y las muevo el lunes al PRI.
 KN: ¿Eh?
 F: Las muevo el lunes al PRI?
 KN: No, no, no, pero creo que va a llevar otro tipo de logotipo.
 F: ¿Me lo consigue usted o dígame a quien le llamo?
 KN: Inaudible. “Promotor” (Inaudible). Bueno, ya les dije que te manden a ti el disquete.
 F: Si señor, claro que si.
 KN: Que fuera a ti directo, para que lo triangulan conmigo.
 F: Si, adelante señor. (Inaudible.)
 KN: No se si es ahora, es mañana, es alrato o es pasado.
 Inaudible, y cuelgan.

Grabación 2:

En una segunda grabación un empleado de Kamel Nacif habla con Jorge Mendoza Velarde —entonces Secretario de Finanzas del PRI estatal— y actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas:

Empleado (E): Buenos días
 Jorge Mendoza (JM): Que tal buenos días
 E: ¿Cómo estás, bien?
 JM: Bien, bien a tus órdenes buenos días.
 E: Oye Jorge, estoy aquí con el señor Kamel, este, te dieron el recado ayer de que ya estaban listas (Inaudible)
 JM: Inaudible.
 E: Entonces te doy el teléfono del nuevo tipo, de la persona que las tiene para que te pongas de acuerdo (Inaudible) 3 62 20 00 —repite el número—, señor Amind Farjat.
 JM: ¿Cómo?
 E: Le repite el nombre de Farjat varias veces y se lo deletrea—. De parte del señor Kamel le dices. Te pones de acuerdo con él ¿no? Ahora te pones de acuerdo con él, el viernes me habló Mario Marín pidiéndole al señor Kamel de favor que le hiciera 100 mil camisetas más con el nuevo logo que dice “Adelante Promotor” y atrás “Mario Marín Gobernador”, que tu tienes el dibujo y el disquet (Inaudible)
 JM: (Inaudible) Después te lo hago llegar.
 E: Sí.

JM: Comunícate con Valentín, el es el que tiene el logotipo (Inaudible)

E: Le hablas tú.

Inaudible

E: Permíteme un segundo.”

Dicha probanza en términos de los artículos 358 fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción II y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerada como una documental privada, misma que tiene el valor de presunción admitiendo prueba en contrario y sólo hará prueba plena, cuando al relacionarlo con los demás elementos que obren en el expediente, no dejen dudas sobre la verdad de los hechos.

Así, de dicha nota se desprende lo siguiente:

- La mención de dos conversaciones telefónicas reproducidas por W-Radio en el noticiero conducido por Carmen Aristegui, donde supuestamente se da el apoyo en el año dos mil cuatro del empresario Kamel Nacif a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres. En las grabaciones se habla de un apoyo de al menos 90 mil playeras con la leyenda “Marín Gobernador”.
- Que la grabación fue transmitida el día de “ayer” y la nota es de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, por lo que la fecha de transmisión sería el dieciocho de septiembre de dos mil seis.
- El señalamiento de que “CAMBIO” reproduce la versión estenográfica del material, el cual que presenta fallas de origen y la transcripción de las mencionadas grabaciones.

Sin embargo, aún cuando se observan éstos elementos al adminicular la presente nota periodística con algún otro elemento de prueba no se acredita que la conversación se realizó entre las personas mencionadas por el Partido Acción Nacional en su escrito de denuncia, así como la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho, procediendo posteriormente a su análisis en conjunto con las demás notas periodísticas aportadas por el promovente.

En este sentido, como se indicó este Órgano Auxiliar analizará en su conjunto las notas periodísticas presentadas como medios probatorios por el denunciante atendiendo a lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual señala:

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.—Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—6 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado.—Coalición por un Gobierno Diferente.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002.—Partido Acción Nacional.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.

Revista *Justicia Electoral* 2003, suplemento 6, página 44, Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 192-193.”

En este contexto, en el cuadro a continuación se analizará las partes coincidentes entre ellas:

E-CONSULTA	LA JORNADA DE ORIENTE	LA QUINTA COLUMNA
La opinión de un medio de comunicación respecto a que la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que el Instituto Estatal Electoral realizara una investigación sobre el financiamiento que recibió el Partido Revolucionario Institucional durante el año dos mil cuatro.	La opinión de un medio de comunicación respecto al análisis que el Instituto Electoral del Estado efectuaba sobre el exhorto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado para que se realizara una investigación sobre el financiamiento que recibió el Partido Revolucionario Institucional durante el año dos mil cuatro.	
La supuesta aportación de un millón y medio de pesos en especie por parte de Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario		

E-CONSULTA	LA JORNADA DE ORIENTE	LA QUINTA COLUMNA
Institucional.		
Que entre la lista de empresarios que financiaron la campaña del gobernador revelada por Casas Arellano no figuró Nacif Borge. No obstante, el denominado “Rey de la Mezclilla” aportó más de 100 mil playeras al candidato Mario Marín Torres que superarían el millón de pesos, al estimar un costo unitario de entre 10 y 15 pesos, de acuerdo con textileros consultados.		
La nota que la periodista Carmen Aristegui difundió en su noticiario transmitido por W Radio relativo al contenido de una conversación que Kamel Nacif Borge sostuvo con un empleado suyo en la que le ordena la inmediata impresión de 60 mil playeras a favor del ex candidato priísta, sumadas a otras miles ya almacenadas.	Que el origen de dicho exhorto fueron las conversaciones telefónicas reproducidas el dieciocho de septiembre de dos mil seis por W-Radio en el noticiario conducido por Carmen Aristegui, donde Kamel Nacif habla sobre la campaña de Marín.	La mención de dos conversaciones telefónicas reproducidas por W-Radio en el noticiario conducido por Carmen Aristegui, donde supuestamente se da el apoyo en el año dos mil cuatro del empresario Kamel Nacif a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres. En las grabaciones se habla de un apoyo de al menos 90 mil playeras con la leyenda “Marín Gobernador”. Que la grabación fue transmitida el día de “ayer” y la nota es de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, por lo que la fecha de transmisión sería el dieciocho de septiembre de dos mil seis.
		El señalamiento de que “CAMBIO” reproduce la versión estenográfica del material el cual que presenta fallas de origen y la transcripción de las mencionadas grabaciones.
Que la nota transmitida en W Radio fue transmitida “por la mañana de ayer”, por lo que atendiendo a que la nota es de fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, la fecha en que se transmitió sería el veinte de septiembre de dos mil seis.		

Como se advierte del anterior cuadro, las tres notas periodísticas son coincidentes respecto a que la noticia sobre la transmisión de una grabación donde supuestamente Kamel Nacif Borge habla sobre la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro fue difundida en el noticiero de la periodista Carmen Aristegui en W Radio.

Por lo cual se tiene un indicio respecto a la transmisión de la grabación en cita en el noticiero de la periodista Carmen Aristegui en W Radio, sin embargo las tres notas no son coincidentes en cuanto a la fecha de transmisión de la mismas y no otorgan la certeza de que los hechos a que se refieren hubieren acontecido en los términos que se sostienen en las mismas, aunado a que no pueden vincularse con la grabación aportada por el Partido Acción Nacional.

Bajo este contexto, con la aportación de dichos medios de prueba no se fortalece el argumento del denunciante pues las notas periodísticas no se encuentran robustecidas con otros elementos que generen la certeza de que la conversación existió y que los locutores son las personas señaladas por el Partido Acción Nacional en su escrito de denuncia. Con ello se proporciona una simple presunción respecto de los hechos denunciados pues son mayores los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria de las circunstancias señaladas por el denunciante.

Así, de la adminiculación de las pruebas con los demás elementos no se proporciona el grado convictivo necesario para acreditar el dicho del promovente respecto a la existencia de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

5) COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO IEE/DPPM/457/04

Por lo que toca a la copia certificada del oficio número IEE/DPPM/457/04 de fecha nueve de julio de dos mil cuatro signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Así del oficio en comento se advierte el recordatorio que gira la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado, Licenciada Amalia Oswelia Varela Serrano, al Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Jorge Mendoza Velarde, en relación con el límite anual de aportaciones en dinero de militantes y/o simpatizantes del periodo del primero de julio de dos mil cuatro al treinta de junio de dos mil cinco, así como el límite anual de aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello del periodo del primero de julio de dos mil cuatro al treinta de junio de dos mil cinco.

Bajo este contexto, de dicha prueba se acredita el dicho del denunciante respecto a la existencia del Licenciado Jorge Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

De igual forma, es de mencionar que contrario a lo que el promovente señala respecto a que la supuesta aportación de las camisetas podría rebasar el millón de pesos es de indicar que en el caso de aportaciones en especie de militantes y/o simpatizantes se informa en el cuerpo del recibo respectivo el bien aportado y el criterio de valuación que se haya utilizado atendiendo a lo indicado por los artículos 67 y 71 del Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado aplicable, por lo cual no existe certeza respecto a que la supuesta aportación corresponda a la cantidad antes indicada, pues como se observa dicha información la proporciona el propio instituto político refiriendo el criterio de valuación.

Asimismo, debe indicarse que no hay indicios de la existencia de dichas aportaciones ya sea en dinero o en especie a la campaña electoral del entonces candidato a Gobernador del Estado. Además de que, lo que en su momento se dictamina en el procedimiento de fiscalización es la información proporcionada de buena fe por los partidos políticos, en este caso por el Partido Revolucionario Institucional, entendida ésta como la conducta exigible a toda persona en sus relaciones jurídicas con los demás, incluyendo los partidos políticos; y esta protección legal exige y presume que tal actuar tiene un objeto y un fin lícitos, por lo que se insiste que el punto de partida respecto a la información proporcionada es el principio de buena fe con que se deben desarrollar las relaciones entre la autoridad electoral y los partidos políticos; asimismo se debe considerar como básica la presunción de que ordinariamente los representantes de los partidos políticos actúan de acuerdo con la voluntad general de la persona moral que representan y habitualmente, en beneficio de los intereses de la misma.

6) COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO NÚMERO XVI

En cuanto a la copia certificada del formato número “XVI” de fecha catorce de enero de dos mil cinco, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Así del formato en comento se advierte el Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral del año dos mil cuatro, en el cual se señala:

- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA” como tipo de campaña electoral la de Gobernador, fecha de inicio el cuatro de septiembre de dos mil cuatro, de término el diez de noviembre de dos mil cuatro, el tope de \$39,206,826.23 (treinta y nueve millones doscientos seis mil ochocientos veintiséis pesos, 23/100 M.N.);
- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO” el nombre del Licenciado Mario Plutarco Marín Torres;
- En el apartado de “ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS)” las aportaciones del Comité Directivo Estatal en efectivo por \$ 5,658,085.90 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.) las aportaciones de militantes en especie por \$158, 551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.), las aportaciones de simpatizantes tanto en efectivo como en especie se encuentran en ceros, dando un total de \$ 5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);
- En el rubro de “DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA” como gastos de propaganda \$3,253,366.86 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 86/100 M.N.), como gastos operativos de campaña \$497,181.07 (cuatrocientos noventa y siete mil ciento ochenta y un pesos 07/100 M.N.), como gastos de prensa, radio y televisión \$2,066,089.73 (dos millones sesenta y seis mil ochenta y nueve pesos 73/100 M.N.), como resultado total la cantidad de \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);

- En el apartado “RESUMEN” como ingresos \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.) y como egresos \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);
- Por último el rubro “RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN” se encuentra el Licenciado Jorge Luis Mendoza Velarde en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas del CDE del PRI y el Licenciado Mario Plutarco Marín Torres en su carácter de candidato.

En dicho formato se observa la información sobre el origen, monto y destino de los recursos de la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, Licenciado Mario Plutarco Marín Torres.

Bajo este contexto, de dicha prueba se acredita el dicho del denunciante respecto a la existencia del Licenciado Jorge Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, en específico se advierte que se acredita el dicho del denunciante respecto a que las aportaciones en efectivo ascendieron a un monto de \$ 5,658,085.90 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.), que las aportaciones de simpatizantes en efectivo y especie aparecen en ceros y en las aportaciones de militantes en especie se reportó la cantidad de \$158,551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.).

7) COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO NÚMERO XVII

Por lo que toca a la copia certificada del formato número “XVII” de fecha catorce de enero de dos mil cinco, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Así, del formato en comento se advierte la conciliación sobre el origen, monto y destino de los recursos de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral del año dos mil cuatro, en el cual se señala:

- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA” como tipo de campaña electoral la de Gobernador, fecha de inicio el cuatro de septiembre de dos mil cuatro, de termino el diez de noviembre de dos mil cuatro, el tope de \$39,206,826.23 (treinta y nueve millones doscientos seis mil ochocientos veintiséis pesos, 23/100 M.N.);
- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO” el nombre del Licenciado Mario Plutarco Marín Torres;
- En el apartado de “RESUMEN” respecto al:
 - “1. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS) ÚNICAMENTE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS” la cantidad de \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.).
 - “2. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA (EGRESOS) ÚNICAMENTE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS” \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.).
 - “3. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS) PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES” \$9,019,318.88 (nueve millones diecinueve mil trescientos dieciocho pesos 88/100 M.N.).
 - “4. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA (EGRESOS) PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS” \$9,019,318.88 (nueve millones diecinueve mil trescientos dieciocho pesos 88/100 M.N.).
 - “5. ORIGEN Y MONTO DE LAS APORTACIONES DE LA CAMPAÑA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OTORGADOS EN COMODATO” \$158,551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.).
 - “6. DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA (EGRESOS) PROVENIENTES DE APORTACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES OTORGADOS EN COMODATOS” \$158,551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.).
- Por último en el rubro “RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN” se encuentra el Licenciado Jorge Luis Mendoza Velarde en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas del CDE del PRI y el Licenciado Mario Plutarco Marín Torres en su carácter de candidato.

Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias observa de dicho formato la información de la conciliación sobre el origen, monto y destino de los recursos de la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, Licenciado Mario Plutarco Marín Torres, en específico se advierte que en el rubro origen y monto de recursos de la campaña (ingresos) se reporta la cantidad de \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100), cantidad que coincide con lo reportado en el Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos de la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, Licenciado Mario Plutarco Marín Torres (formato XVI).

Sin embargo, en dicho formato no se acredita el dicho del promovente respecto a que las aportaciones en efectivo ascendieron a un monto de \$ 5,658,085.90 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.) y en las aportaciones de simpatizantes en efectivo y especie aparecen en ceros y que en las aportaciones de militantes se reportó la cantidad de \$158,551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.).

8) COPIA CERTIFICADA DEL INFORME DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05

Respecto a la copia certificada del informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, derivado del examen al Informe de gastos de campaña, el cual incluye el origen y destino de la ministración bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto, así como del financiamiento privado del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, identificado con el número DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De dicho informe se observa en sus páginas veintisiete y veintiocho que como resultado de la verificación de los ingresos reportados en el Informe de Gastos de Campaña no se encontró observación alguna. Respecto al rubro de financiamiento privado proveniente de militantes se señala que el Partido Revolucionario Institucional reportó la cantidad de \$854,736.78 (ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos 78/100 M.N.) por concepto de ingresos en especie, especificando que dicho rubro fue “verificado al 100% cotejando los ingresos reportados contra los recibos de aportaciones de militantes

y organizaciones sociales con número de folios del 1A al 551 A, determinando que su registro contable es adecuado”.

Asimismo, se señala que en cuanto al rubro de financiamiento privado proveniente de los simpatizantes el Partido Revolucionario Institucional no obtuvo ingresos por ese concepto.

En las páginas veintinueve y treinta del aludido informe, en el rubro de egresos, específicamente en el rubro de gastos de propaganda se señala que el Partido Revolucionario Institucional registró la cantidad de \$4'879,133.85 (Cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos 85/100, M.N.) y en el apartado de propaganda utilitaria se reviso un monto de \$1'169,315.50 (Un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos quince pesos 50/100, M.N.).

De igual forma, en el informe en comento se indica en su página treinta y cuatro que en fecha catorce de enero de dos mil cinco se presentaron los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, para el proceso Electoral del año dos mil cuatro (Formato XVI) y las conciliaciones sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el proceso Electoral del año dos mil cuatro (Formato XVII), refiriéndose que como resultado de la revisión de dichos informes y conciliaciones se advirtió la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y coaliciones, señalando para tal efecto una relación con los mismos y en la cual no se advierte el informe y consolidación del candidato a Gobernador del Estado.

Aunado a lo anterior, en la foja treinta y ocho del documento de mérito se refiere que de la revisión efectuada a los gastos reportados por el Partido Revolucionario Institucional en las actividades de campaña para las elecciones de Diputados de mayoría relativa, Gobernador y miembros de los Ayuntamientos se determina que no se rebasaron los topes que para cada elección determinó el Consejo General en fecha veintitrés de julio de dos mil cuatro mediante el acuerdo identificado con el número CG/AC-069/04.

Dentro de las conclusiones del informe en comento que se encuentra en la página treinta y nueve se señala que la revisión de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación fue realizada de acuerdo a las Normas y Procedimientos de Auditoria emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., en el examen de la evidencia que soporta las cifras de los estados financieros, las normas contenidas en el Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, los principios de contabilidad generalmente aceptados y la evaluación de la presentación de los estados financieros; indicando que dicha Unidad Administrativa considera que sus exámenes proporcionan una

base razonable para sustentar su opinión y que estima que el origen, monto y destino de los recursos correspondientes al periodo de campañas electorales del proceso estatal electoral ordinarios dos mil cuatro del Partido Revolucionario Institucional se encuentra de conformidad con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

Por último, en el ANEXO 2 del informe en comento se señala en la página uno respecto a la campaña electoral de Gobernador lo siguiente:

	CANDIDATO	ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA				TOTAL INGRESOS (A)	DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE:				TOTAL EGRESOS (B)	SALDO (A-B)	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA AUTORIZADO	EXCEDENTE ENTRE EL TOTAL DE EGRESOS Y EL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA AUTORIZADO
		RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRIVADOS	TRANSFERENCIAS FEDERALES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO		RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRIVADOS	TRANSFERENCIAS FEDERALES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO				
GOBERNADOR	MARIO PLUTARCO MARÍN TORRES	\$5,058,095.90	\$158,551.76	\$3,019,318.88	\$158,551.76	\$14,394,508.30	\$5,058,095.90	\$158,551.76	\$3,019,318.88	\$158,551.76	\$14,394,508.30	\$ -	\$39,206,626.23	

Así, del informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación se advierte que la documentación comprobatoria presentada por dicho partido político se encontraba de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, salvo algunas irregularidades que consistían en la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y conciliaciones presentados, entre los que no se encuentra el del candidato a Gobernador del Estado.

Por lo que, del informe en análisis se acredita el dicho del promovente respecto a que en el rubro de gastos de propaganda el Partido Revolucionario Institucional registró la cantidad de \$4'879,133.85 (Cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos 85/100, M.N.), más no se acredita el dicho de que en el apartado de propaganda utilitaria se reviso un monto de \$1'609,315.50 (Un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos quince pesos 50/100 M.N.) pues en el informe se refiere la cantidad de \$1'169,315.50 (Un millón ciento sesenta y nueve mil trescientos quince pesos 50/100, M.N.). Además el promovente señala que el Partido Revolucionario Institucional obtuvo financiamiento privado proveniente de militantes por la cantidad de \$874,736.78 (ochocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos 78/100 M.N.) y en el informe se señala que se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$854,736.78 (ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y seis pesos 78/100 M.N.).

Ahora bien, del informe en análisis no se confirma el dicho del denunciante respecto a que se acredita la existencia del Licenciado Jorge Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo como se refirió anteriormente de las copias certificados

de los formatos número XVI y XVII se confirma la calidad del Licenciado Jorge Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

Tal lo refiere el promovente en el informe en comento no se observa la aportación de las sesenta mil camisas, así como la existencia del Ciudadano Mario Plutarco Marín Torres como candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado en el año dos mil cuatro. Sin embargo, de la adminiculación del presente medio de prueba con los demás elementos no se puede concluir la existencia de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge y el ocultamiento de dicha aportación a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho.

9) COPIA CERTIFICADA DEL INFORME DE CAMPAÑA DOS MIL CUATRO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

En cuanto a la copia certificada del informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, la Secretaría General de este Organismo solicitó a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación mediante memorándum IEE/SG-128/07 de fecha doce de febrero de dos mil ocho remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.

En este sentido, en contestación al requerimiento antes señalado la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación remitió el informe en cita comunicando que la documentación soporte del Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, correspondiente al candidato a Gobernador Mario Plutarco Marín Torres fue devuelta al Partido Revolucionario Institucional en cuestión, en términos de lo dispuesto por el diverso 23 del Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Así, en cuanto al formato número “XVI” de fecha catorce de enero de dos mil cinco el cual se trata del Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral del año dos mil cuatro, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Del formato en comento se advierte lo siguiente:

- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA” como tipo de campaña electoral la de Gobernador, fecha de inicio el cuatro de septiembre de dos mil cuatro, de término el diez de noviembre de dos mil cuatro, el tope de \$39,206,826.23 (treinta y nueve millones doscientos seis mil ochocientos veintiséis pesos, 23/100 M.N.);
- En el rubro de “IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO” el nombre del Licenciado Mario Plutarco Marín Torres;
- En el apartado de “ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS)” las aportaciones del Comité Directivo Estatal en efectivo por \$ 5,658,085.90 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochenta y cinco pesos 90/100 M.N.) las aportaciones de militantes en especie por \$158, 551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.), las aportaciones de simpatizantes tanto en efectivo como en especie se encuentran en ceros, dando un total de \$ 5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);
- En el rubro de “DESTINO DE LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA” como gastos de propaganda \$3,253,366.86 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 86/100 M.N.), como gastos operativos de campaña \$497,181.07 (cuatrocientos noventa y siete mil ciento ochenta y un pesos 07/100 M.N.), como

gastos de prensa, radio y televisión \$2,066,089.73 (dos millones sesenta y seis mil ochenta y nueve pesos 73/100 M.N.), como resultado total la cantidad de \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);

- En el apartado “RESUMEN” como ingresos \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.) y como egresos \$5,816,637.66 (cinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.);
- Por último el rubro “RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN” se encuentra el Licenciado Jorge Luis Mendoza Velarde en su carácter de Secretario de Administración y Finanzas del CDE del PRI y el Licenciado Mario Plutarco Marín Torres en su carácter de candidato.

En dicho formato se observa la información sobre el origen, monto y destino de los recursos de la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, Licenciado Mario Plutarco Marín Torres, en específico se advierte que en el rubro de aportaciones de militantes en especie se reportó la cantidad de \$158,551.76 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.).

En efecto, de dichos formatos se acredita el dicho del denunciado respecto a que no se advierten aportaciones en especie por las supuestas sesenta mil camisas presuntamente aportadas por el C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

10) COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN NÚMERO DIC/CRAF-008/05

En cuanto a la copia certificada del “Dictamen de la Comisión Revisora, en relación con el informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General de este Organismo, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Estatal Electoral Ordinario 2004”, identificado con el número DIC/CRAF-008/05, documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del

Estado es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Del mencionado dictamen se advierte en su página veinticuatro que la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos en la revisión al informe de gastos de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, el consolidado exhibido por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y del soporte documental detectó errores u omisiones técnicas en él, los cuales se hicieron del conocimiento del instituto político en comento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado.

Asimismo, en su página veinticinco se establece que el dictamen en comento contiene el resultado de la verificación y análisis de los procedimientos y formas de revisión aplicados al informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Estatal Electoral Ordinario dos mil cuatro mismos que consistieron en el examen de las operaciones financieras, documentación, registros contables y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que fueron necesarias para efectuar la vigilancia de los recursos financieros, en estricto apego a lo establecido en el Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, las Normas y Procedimientos de Auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. y a las disposiciones fiscales correspondientes.

De igual forma, en dicho Dictamen se refiere que previo análisis de la documentación correspondiente al informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Estatal Electoral Ordinario dos mil cuatro y del cotejo y verificación del informe final presentado por la empresa que efectuó el monitoreo en los medios de comunicación de las campañas electorales de los partidos políticos en el pasado Proceso Estatal Electoral Ordinario dos mil cuatro, la Comisión Revisora en cita estimó que por lo que hace al origen, monto y destino de los recursos, correspondientes al periodo de campañas electorales del Proceso Estatal Electoral Ordinario dos mil cuatro del partido político en comento se encontraban de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, salvo las irregularidades que se refirieron en el anexo único de dicho dictamen y que consisten en la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y conciliaciones presentados, señalando para tal efecto una relación con los mismos y en la cual no se advierte

el informe y consolidación del candidato a Gobernador del Estado.

Por último, se establece en dicho dictamen que de la revisión efectuada a los gastos reportados por el Partido Revolucionario Institucional en las actividades de campaña para las elecciones de Diputados de mayoría relativa, Gobernador y miembros de los Ayuntamientos se desprende que, según el sustento documental que obra en los archivos del departamento de fiscalización de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación de este Organismo Electoral, éstos no excedieron los topes a los gastos de campaña que para cada elección aprobó el Órgano Superior de Dirección de este Instituto Electoral del Estado mediante acuerdo número CG/AC-069/04.

Así, del Dictamen de la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos se advierte que la documentación comprobatoria presentada por dicho partido político se encontraba de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, salvo algunas irregularidades que consistían en la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y conciliaciones presentados, entre los que no se encuentra el del candidato a Gobernador del Estado.

Del dictamen en análisis, no se acredita el dicho del promovente respecto a que en lo reportado por el Partido Revolucionario Institucional no se advierten aportaciones en especie por las supuestas sesenta mil camisas presuntamente aportadas por el C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

B. MEDIOS DE PRUEBA REQUERIDOS A DIVERSAS AUTORIDADES

Cabe mencionar, que este Órgano Auxiliar en el desarrollo de la investigación de los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional tomó en consideración la existencia de elementos que de manera indiciaria permitieran arribar al conocimiento de que existe la factibilidad jurídica de llegar a la cabal comprobación de los hechos denunciados.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto señalan:

“ QUEJAS POR IRREGULARIDADES SOBRE LOS INGRESOS O EGRESOS DE UN PARTIDO O AGRUPACIÓN POLÍTICA. PARA SU PROCEDENCIA, EL DENUNCIANTE NO DEBE DEMOSTRARLAS DE MANERA FEHACIENTE.—

Dada la naturaleza de los hechos generadores de las quejas relacionadas con los ingresos y egresos de los partidos y agrupaciones políticas, como en la mayoría de los casos, sería prácticamente imposible que el partido político denunciante, en ejercicio del derecho consagrado en su favor por el artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales recabe los medios de convicción necesarios para acreditar, de manera evidente e indubitable, los hechos sobre los que versa la denuncia, en virtud de que, por regla general, las pruebas que los demuestren se encuentran en poder de autoridades o dependencias gubernamentales que están impedidas a proporcionarlas a particulares, de ello se sigue que no puede exigirse al denunciante acreditar fehacientemente los hechos atribuidos, porque proceder de tal forma, implicaría hacer nugatorias las normas que otorgan el derecho a los partidos políticos de revelar tal clase de irregularidades e iría en contra del espíritu del Constituyente Permanente, de transparentar el origen y el destino de los recursos de dichos entes políticos; y que tienen derecho de acuerdo con la fracción II, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, está facultada, según se desprende del texto del artículo 49-B, del Código Electoral Federal, para realizar las investigaciones pertinentes, tendientes a comprobar si son o no ciertos los hechos denunciados; en el entendido de que, si bien, para que se dé trámite a la queja no se requiere de prueba plena de los hechos denunciados, sí se exige, en cambio, de cuando menos elementos que aunque sea de modo indiciario permitan arribar al conocimiento de que existe la factibilidad jurídica de llegar a la cabal comprobación de los mismos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-012/99 y acumulados.—Partido Revolucionario Institucional.—30 de junio de 1999.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Disidente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

Revista *Justicia Electoral* 2000, Tercera Época, suplemento 3, páginas 67-68, Sala Superior, tesis S3EL 043/99.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 841-842.”

Asimismo, la siguiente tesis relevante emitida por el citado Órgano Jurisdiccional:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL RELACIONADO CON LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. NORMAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.—

La investigación que debe realizar el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en los procedimientos administrativos sancionadores electorales que le corresponde instruir, debe dirigirse, en primer lugar, a corroborar los indicios que se desprendan (por leves que sean) de los elementos de prueba aportados por el denunciante, allegándose las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o desvanecerlos, y establecer si la versión planteada en la queja se encuentra o no suficientemente sustentada para considerar probables los hechos de que se trate. Esto es, el campo dentro del cual la autoridad puede moverse inicialmente en la investigación de los hechos, tendrá que tomar como base, los indicios que surjan de los elementos aportados, y así podrá acudir a los medios concentradores de datos a que pueda acceder legalmente, con el propósito de dicha verificación, así como para corroborar la existencia de personas y cosas relacionadas con la denuncia, tendientes a su localización, como pueden ser, los registros o archivos públicos que por disposición de la ley estén accesibles al público en general. En caso de que el resultado de estas primeras investigaciones no arrojen la verificación de hecho alguno, ni avance algo en ese sentido, o bien obtengan elementos que desvanezcan o destruyan los principios de prueba que aportó el denunciante, sin generar nuevos indicios relacionados con la materia de la queja, se justificará plenamente que la autoridad administrativa no instrumente más diligencias tendientes a generar otros principios

de prueba, en relación con esos u otros hechos, pues la base de su actuación radica precisamente en la existencia de indicios derivados de los elementos probatorios inicialmente aportados, y de la existencia de las personas y cosas relacionadas con éstos. En cambio, si se fortalece de alguna forma la prueba inicial de ciertos hechos denunciados, la autoridad tendrá que sopesar el posible vínculo de inmediatez entre los indicios iniciales y los nuevos que resulten, de manera que si se produce entre ellos un nexo directo, inmediato y natural, se denotará que la averiguación transita por camino sólido y que la línea de investigación se ha extendido, con posibilidades de reconstruir la cadena fáctica denunciada, por lo cual, a partir de los nuevos extremos, se pueden decretar otras diligencias en la indagatoria tendientes a descubrir más eslabones inmediatos, si los hay y puedan existir elementos para comprobarlos, con lo cual se dará pauta a la continuación de la investigación, hasta que ya no se encuentren datos vinculados con los datos de la línea de investigación iniciada.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 54-55, Sala Superior, tesis S3ELJ 65/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 243-244.”

Aunado a lo anterior, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias tomó en consideración en la investigación de los hechos denunciados lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por los cuales se salvaguarda a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación, y de los cuales derivan ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad electoral administrativa en las diligencias de investigación encaminadas a la obtención de elementos de prueba con motivo de la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, como es el caso de la idoneidad (la aptitud de la prueba para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto), la necesidad o intervención mínima (ante la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados) y proporcionalidad (la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados y el carácter del titular del derecho).

Lo anterior, encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal cuyos rubros y textos refieren:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de

relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 51-52, Sala Superior, tesis S3ELJ 62/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 235-236.”

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS GOBERNADOS.—

Las amplias facultades del secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas para investigar y allegarse oficiosamente elementos de prueba en los procedimientos administrativos sancionadores de su competencia, se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del individuo consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad, dignidad y privacidad del individuo en su persona, derechos y posesiones; derechos que deben ser respetados por toda autoridad a las que, por mandato constitucional, se les exige fundar y motivar las determinaciones en las que se requiera causar una molestia a los gobernados, pues la restricción eventual permitida de los derechos reconocidos constitucionalmente debe ser la excepción, y por esta razón resulta necesario expresar los hechos que justifiquen su restricción. De esta forma, se deben privilegiar y agotar las diligencias en las cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran recabarse de las autoridades, o si es indispensable afectarlos, que sea con la mínima molestia posible.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 52-53, Sala Superior, tesis S3ELJ 63/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 236-237.”

Asimismo, sirve de sustento el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del

expediente identificado con el número SUP-RAP-050/2001 en cuya parte considerativa se señala:

"Las comentadas disposiciones constitucionales ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora, por la que se ordenan determinadas diligencias para recabar pruebas.

Ese principio genera ciertos criterios básicos que conducen a asegurar una correspondencia entre las determinaciones que puede adoptar la autoridad administrativa electoral en la investigación de los hechos denunciados, y los bienes jurídicos o derechos fundamentales que, con motivo de ellas, pudieran resultar restringidos o afectados; dichos criterios atañen a la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de las medidas encaminadas a la obtención de elementos de prueba.

Dentro del procedimiento administrativo comentado, la autoridad pudiera estimar que determinadas diligencias son conducentes para esclarecer los hechos denunciados, para lo cual habrá de considerar que sean idóneas, es decir, estimará racionalmente si conducen o no a resultados previsiblemente objetivos y ciertos, indicando si con esa diligencia se logrará un fin probatorio o si se acercará a él o lo facilitará, o bien, si por el contrario, en realidad se alejará de él o dificultará su satisfacción. Esto es, por la idoneidad, se impone que las medidas no sólo sean aptas para conseguir un fin determinado, sino que además, deben tener ciertas probabilidades de ser eficaces en el caso concreto.

Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial cuidado en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su caso, serán objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean investigadas, así como el tiempo que permanecerá la afectación, pues de no ser así se correría el riesgo de cometer un exceso o abuso en la investigación de los hechos materia de la queja; así, se impedirá aplicar sobre terceros (respecto de quienes no se tiene indicio o principio de prueba alguno en relación con los hechos denunciados), medidas de considerable afectación, en tanto que no existen motivos racionalmente suficientes para tener una mínima convicción sobre la probabilidad o verosimilitud en su participación en los hechos que dieron origen a la queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración para el esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente ponderado el éxito previsible de la medida en la consecución del fin probatorio que se pretende, y que las molestias que se les infieran sean las mínimas posibles.

La idoneidad también hace relación con la intencionalidad o actitud que la autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su realización habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el conocimiento de la verdad objetiva por encima de prejuicios o hipótesis preconcebidas, descontando la intención de perjudicar o beneficiar a alguien.

Dicha característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien encarna a la autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar la información, si lo hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más allá de los objetivamente necesarios; así como la previsión del manejo que hará con el resultado de tales investigaciones, utilizándolo exclusivamente en lo que contribuya a esclarecer el asunto y devolviendo, en su momento, lo que estime inconducente, o bien, vedando el conocimiento a terceros, respecto de los informes o documentación de los que manifiestamente no se pueda obtener elementos para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Por lo que toca al criterio de necesidad, también llamado por la doctrina, de manera uniforme, como de intervención mínima, tiene como finalidad que, ante la posibilidad de llevar a cabo varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, que afectaran en alguna medida los derechos fundamentales de personas relacionadas con los hechos denunciados, se elija la medida que los afecte en menor grado, con lo cual se disminuye la molestia originada por la intromisión de la autoridad investigadora en la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos.

Llega a ser indispensable que por el criterio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo, la autoridad pondere los valores e intereses constitucionalmente protegidos, según las circunstancias del caso concreto, conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los intereses individuales de una persona física o moral, guarda una relación razonable con la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, de tal suerte que si una actuación determinada comporta una excesiva afectación, pudiera considerarse inadmisibile.

Para llevar a cabo la señalada ponderación, la autoridad investigadora estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, para lo cual es menester que de manera explícita se precisen las consideraciones al tenor de los cuales se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de la preservación de otro valor. Se trata de que la autoridad sopesa la probabilidad de que los hechos sustentantes de la denuncia puedan llegar a ser efectivamente corroborables y, por ende, la trascendencia y afectación que podría haberse generado de ser ciertos, circunstancia bajo la cual, le será posible apreciar si la molestia inferida vale, en función de su naturaleza, aquilatando inclusive la intensidad de la afectación frente a lo que se pretende obtener."

Una vez establecido lo anterior, se analizarán los elementos que obran en el expediente materia del presente dictamen. Así, atendiendo a lo requerido por el Partido Acción Nacional en la denuncia de mérito, la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado solicitó diversa información relacionada con los hechos denunciados mediante los oficios números IEE/SG-186/07, IEE/SG-187/07, IEE/SG-188/07, IEE/SG-189/07, IEE/SG-190/07, IEE/SG-191/07, IEE/SG-192/07, IEE/SG-193/07, IEE/SG-194/07, IEE/SG-195/07 y IEE/SG-196/07 de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, así como el oficio número IEE/SG-099/08 de fecha doce de febrero de dos mil ocho dirigidos a:

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA
Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones	<i>Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i>
Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado	status de la línea. Informara sobre la existencia de algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.
Jefe del Servicio de Administración Tributaria	Informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
Secretario de Hacienda y Crédito Público	Informara respecto a las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA
	actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.
Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social	Informara sobre la existencia de algún registro patronal a nombre del C. Kamel Nacif Borge, así como si el C. Amin Farjat o Amin Farjad cuenta con registro de alta como trabajador o empleado de alguna empresa y en caso de ser así el nombre de dicha empresa.
Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla	Comunicara si dentro del Registro de Sociedades figura el C. Kamel Nacif Borge en calidad de socio.
Director General del Centro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Puebla	Solicitará a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
Director de W Radio	Informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
Director General del Periódico Digital e-consulta	Comunicara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT" publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna	Informaran si contaban en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "Kamel Nacif apoyó campaña de Marín" publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html , sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
Director de la Jornada de Oriente	Informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "EL IEE podría

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA
	desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín" publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.
Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación de este Organismo Electoral	Informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral y remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.

1) COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Mediante oficio número IEE/SG-186/07 se le solicitó al Presidente de la

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de dicho requerimiento el Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, C. José Jorge Mena Ortiz, mediante oficio número CFT/D01/STP/6469/2007 de fecha once de septiembre de dos mil siete presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto manifestó que dicho órgano regulador no lleva un registro detallado sobre los números de líneas

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

■

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

■

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

resultados objetivos y ciertos respecto a la investigación de los hechos denunciados, pues como se advierte el mencionado número telefónico se obtiene de la transcripción de una grabación en una nota periodística aportada por el denunciado del periódico digital “La quinta columna” la cual a su vez hace referencia a que la misma se obtuvo de “Cambio”, situación que no aporta elementos suficiente para justificar la molestia que al respecto se efectuó, así como el tiempo que permanecerá la afectación, pues no se dan motivos suficientes para tener una mínima convicción sobre la probabilidad o verosimilitud sobre dicha línea telefónica en los hechos que dieron origen a la queja, situación que no justifica la molestia a los intereses individuales de una persona moral.

Así, de la información proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones sí se acredita la existencia de la línea telefónica señalada por el promovente, no obstante no se acredita la persona que es titular de la misma y quienes son los usuarios que la utilizan para comprobar la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

2) VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO

Mediante oficio número IEE/SG-187/07 se le solicitó al Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado informara si existía algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.

El Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, Ingeniero José Octavio Muñoz Reyes, manifestó que el artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que el Instituto Federal Electoral fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por el código de la materia y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de Juez competente, por lo que considerando que la información que solicita el Instituto Electoral del Estado de Puebla será utilizada para que atienda la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional relacionada con presuntas violaciones del Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en consecuencia no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estricto apego a los principios de certeza y legalidad que rigen las actividades del Instituto Federal Electoral, tal y como los dispone el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra legalmente impedida para proporcionar al Instituto Electoral del Estado la información requerida.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

Asimismo, cabe resaltar que el Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado refiere que el Instituto al cual representa y este Organismo

Electoral signaron en fecha primero de junio de dos mil siete un Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en materia del Registro Federal de Electores con motivo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil siete, a través del cual se proporcionó el Listado Nominal de la Entidad, sin embargo en el mencionado Convenio este Instituto se obliga en la cláusula DÉCIMA OCTAVA a lo siguiente:

“DÉCIMA OCTAVA. La entrega de la información y documentación que realizará **“LA D.E.R.F.E.”** a **“EL I.E.E.”** con motivo del presente Convenio Específico, no implica el libre uso y disposición de la misma, por lo que **“EL I.E.E.”** y los representantes de los partidos políticos acreditados ante ese organismo electoral local que tengan acceso a ella, únicamente estarán autorizados para su uso, manejo y aprovechamiento con fines estrictamente electorales y en los términos de los compromisos adquiridos por virtud de este instrumento jurídico.”

En este sentido, la información no puede obtenerse del Listado Nominal proporcionado con motivo del Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil siete.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- La información solicitada no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por lo que no puede ser proporcionada en virtud de tratarse de un procedimiento en el cual el Instituto Federal Electoral no es parte.

Bajo este contexto, la información de mérito fue solicitada al Instituto Federal Electoral atendiendo a la solicitud del Partido Acción Nacional con la finalidad de ubicar a Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad y solicitar su colaboración al respecto, sin embargo este Cuerpo Colegiado determinó no efectuar más diligencias al respecto considerando los principios de necesidad y proporcionalidad, pues al tratarse de dos particulares es necesario realizar la intervención mínima en los derechos fundamentales de dichas personas, aunado a que se ponderó que el sacrificio de los intereses de los mencionados particulares no aportaría mayores elementos para resolver el presente asunto pues como se mencionó únicamente se les solicitaría su colaboración más de ningún modo se obligaría a la misma. De igual forma, se tomó en cuenta que no se tiene convicción respecto a la participación de las citadas personas en la grabación aportada por el denunciado o en las grabaciones referidas en las notas periodísticas, situación que no justifica la molestia a los intereses individuales de un particular.

Así, de la información proporcionada por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado no

puede ubicarse a Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad y solicitar su colaboración al respecto.

En relación con lo anterior, debe señalarse que atendiendo a las disposiciones contenidas en los artículos 358 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 26 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado dentro de las pruebas que pueden presentarse en la materia no se encuentra la prueba testimonial, al no encontrarse permitido como medio de prueba la testimonial no se acredita el solicitar su colaboración respecto de los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional.

Cabe mencionar, el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente identificado con el número SUP-JRC-93/2006 y su acumulado SUP-JRC-99/2006, el cual señala

“...

Por otra parte, es infundado su argumento en cuanto a que, el hecho de que el artículo 335 del Código Electoral del Estado de México no incluya la prueba testimonial, no impide que la misma se ofrezca a través de alguno de esos elementos.

Se afirma lo anterior, ya que ese artículo enuncia de manera limitativa el tipo de elementos de convicción que pueden ser ofrecidos en la tramitación de los medios de impugnación previstos por dicho código, de ahí que, si no contempla la prueba testimonial, fue jurídicamente correcta la determinación del tribunal responsable de no tener como tal, ni siquiera como si hubiese sido preconstituida, la manifestación de Norma Elena Burgos Reyes contenida en el instrumento notarial número 30,005, volumen DLXV, de 2006, pasado ante la fe de Gabriel M. Ezeta Moll, Notario Público Número 82 del Estado de México, al tenor siguiente:

...”

3) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Mediante oficio número IEE/SG-188/07 se solicitó al Jefe del Servicio de Administración Tributaria informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.

El Administrador Central de la Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, manifestó que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que

se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información solicitada.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- El Servicio de Administración Tributaria se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, atendiendo al artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Cabe indicar que, la información de mérito fue solicitada con la finalidad de determinar si existió en las actividades económicas de Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad una operación relacionada con los hechos denunciados, sin embargo este Cuerpo Colegiado determinó no efectuar más diligencias al respecto considerando los principios de idoneidad y proporcionalidad pues la solicitud de dicha información no conduce a resultados objetivos y ciertos respecto a la investigación de los hechos denunciados pues se pondero el sacrificio de los intereses de los mencionados particulares en virtud de que como se ha mencionado no se tiene convicción respecto a la participación de las citadas personas en la grabación aportada por el denunciado o en las grabaciones referidas en las notas periodísticas, situación que no justifica la molestia a los intereses individuales de un particular.

Así, de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria y de su adminiculación con los demás elementos probatorios no se

puede verificar si existió alguna operación sobre un volumen de camisas aportadas al Partido Revolucionario Institucional o alguno de sus funcionarios para comprobar la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

4) SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Mediante oficio número IEE/SG-189/07 se solicitó al Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha

El Subadministrador de Apoyo Técnico Jurídico para la Aplicación de la Normatividad del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Enrique Olvera Flores manifestó que legalmente no es posible proporcionar la información solicitada, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los numerales 5 y 69 del Código Fiscal de la Federación, 8 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los diversos 210 y 211 del Código Penal Federal y en virtud de no satisfacerse los supuestos de excepción previstos en los ordenamientos en vigor antes citados.

El Administrador Central de la Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, manifestó que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información solicitada.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- El Servicio de Administración Tributaria se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información atendiendo al artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los numerales 5 y 69 del Código Fiscal de la Federación, 8 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los diversos 210 y 211 del Código Penal Federal; y
- La información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, atendiendo al artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Es de mencionar que, la información de mérito fue solicitada con la finalidad de determinar si existió en las actividades económicas de Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad una operación relacionada con los hechos denunciados, sin embargo este Cuerpo Colegiado determinó no efectuar más diligencias al respecto considerando los principios de idoneidad y proporcionalidad pues la solicitud de dicha información no conduce a resultados objetivos y ciertos respecto a la investigación de los hechos denunciados pues se pondero el sacrificio de los intereses de los mencionados particulares en virtud de que como se ha mencionado no se tiene convicción respecto a la participación de las citadas personas en la grabación aportada por el denunciado o en las grabaciones referidas en las notas periodísticas, situación que no justifica la molestia a los intereses individuales de un particular.

Así, de la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de su adminiculación con los demás elementos probatorios no se puede verificar si existió alguna operación sobre un volumen de camisas aportadas al Partido Revolucionario Institucional o alguno de sus funcionarios para comprobar la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

5) DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Mediante oficio número IEE/SG-190/07 se solicitó al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social informara si existe algún registro patronal a nombre del C. Kamel Nacif Borge, así como si el C. Amin Farjat o Amin Farjad cuenta con registro de alta como trabajador o empleado de alguna empresa y en caso de ser así el nombre de dicha empresa.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- *Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*
-

Así, de la información proporcionada por la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y de su adminiculación con los demás elementos probatorios se acredita el dicho del promovente respecto a la existencia de las personas Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta y la relación de estas personas con la actividad empresarial dentro del giro de la construcción, no así la relación laboral entre dichas personas.

6) REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE PUEBLA

Mediante oficio número IEE/SG-191/07 se solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla si dentro del Registro de Sociedades figura el C. Kamel Nacif Borge en calidad de socio.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la documentación anexa a la contestación del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Licenciado Juan Carlos Vicente Cabrera, se observa lo siguiente:

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- La existencia de la persona Kamel Nacif Borge y la relación de esta con la actividad empresarial dentro del giro de la industria textil.

- Que no existe relación empresarial entre las personas Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta pues en las empresas en la cuales aparece como socio Kamel Nacif Borge no se encuentra Amin Fajard Nasta.

Así, de la información proporcionada por el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio y de su administración con los demás elementos probatorios se acredita el dicho del promovente respecto a la existencia de la persona Kamel Nacif Borge y la relación de esta con la actividad empresarial dentro del giro de la industria textil.

7) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN PUEBLA

Mediante oficio número IEE/SG-196/07 se requirió al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla solicitara a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

El Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla, Ingeniero Daniel Ortiz y Caso, manifestó que dicha Dependencia del Ejecutivo Federal no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- El Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión

Así, de la información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla y de su administración con los demás elementos probatorios no se puede obtener la grabación transmitida en la estación W Radio y la forma en la cual se obtuvo.

8) W RADIO

Mediante oficio número IEE/SG-192/07 se solicitó al Director de W Radio informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

En fecha doce de febrero de dos mil ocho mediante oficio IEE/SG-099/08 se requirió nuevamente al Director de W Radio la información antes señalada sin que se recibiera contestación alguna.

Atendiendo a lo anterior, este Órgano Auxiliar aprobó que el Secretario General requiriera nuevamente la información en cita, lo cual efectuó en fecha catorce de julio del año en curso mediante oficio IEE/SG-798/08 señalándose que en caso de no contar con la información de mérito, esta Comisión dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo

9) PERIÓDICO DIGITAL E-CONSULTA

Mediante oficio número IEE/SG-193/07 se solicitó al Director General del Periódico Digital e-consulta si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT” publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

En virtud de no contar con respuesta por parte de dicho medio de comunicación, este Órgano Auxiliar aprobó que el Secretario General requiriera nuevamente la información en cita, lo cual efectúo en fecha catorce de julio del año en curso mediante oficio IEE/SG-795/08 señalándose que en caso de no contar con la información de mérito, esta Comisión dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo

10) PERIÓDICO DIGITAL LA QUINTA COLUMNA

Mediante oficio número IEE/SG-194/07 se solicitó a los Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “Kamel Nacif apoyó campaña de Marín” publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html, sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

En virtud de no contar con respuesta por parte de dicho medio de comunicación, este Órgano Auxiliar aprobó que el Secretario General requiriera nuevamente la información en cita, lo cual efectúo en fecha catorce de julio del año en curso mediante oficio IEE/SG-796/08 señalándose que en caso de no contar con la información de mérito, esta Comisión dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo

11) LA JORNADA DE ORIENTE

Mediante oficio número IEE/SG-195/07 se solicitó al Director de la Jornada de Oriente informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística “EL IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín” publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a

Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.

En virtud de no contar con respuesta por parte de dicho medio de comunicación, este Órgano Auxiliar aprobó que el Secretario General requiriera nuevamente la información en cita, lo cual efectuó en fecha catorce de julio del año en curso mediante oficio IEE/SG-797/08 señalándose que en caso de no contar con la información de mérito, esta Comisión dictaminaría el asunto con las constancias que obran en el expediente respectivo

En tales condiciones, con relación a los oficios girados a los medios de comunicación W Radio, e-consulta, la Quinta Columna y la Jornada de Oriente y sus respectivos recordatorios, tomando en consideración que en términos del artículo 16 párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la grabación aportada por el Partido Acción Nacional no tiene valor probatorio alguno, sirviendo únicamente como una hipótesis por dilucidar este Cuerpo Colegiado determinó que para efectos de la investigación realizada no tenía algún efecto esperar la respuesta de dichos medios de comunicación pues aun cuando los mismos aportaran la grabación de mérito no se tendría certeza respecto a los hechos contenidos en la citada grabación y que la misma hubiese sido obtenida apegada a lo dispuesto por el aludido artículo 16 constitucional, ya que como se advierte de las notas periodísticas aportadas por el promovente, documentales privadas que ya han sido valoradas por este Órgano Auxiliar, no se aportan elementos que robustezcan el dicho del denunciante.

12) DIRECCIÓN DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asimismo, atendiendo a lo requerido por el Partido Acción Nacional en la denuncia de mérito, la Secretaría General del Instituto Electoral del Estado en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado solicitó a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación mediante memorándum IEE/SG-128/07 de fecha doce de febrero de dos mil ocho la siguiente información:

- Informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral. En caso de ser afirmativo lo anterior remitiera la acreditación respectiva.

En este sentido, en contestación al requerimiento antes señalado la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación informó que en los archivos de dicha Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que el Ciudadano Salvador Mendoza ha ostentado el cargo de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

Documento que de conformidad con los artículos 358 fracción I, 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 26 fracción I y 27 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, es considerado como documental pública, misma que tiene pleno valor probatorio, admitiendo prueba en contrario.

De la contestación en comento se desprende lo siguiente:

- En los archivos de dicha Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que el Ciudadano Salvador Mendoza ha ostentado el cargo de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.

Cabe indicar que el Partido Acción Nacional hace referencia a la solicitud de conocer si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral, situación que como se mencionó no se acredita, sin embargo de la lectura integral de la denuncia de mérito se hace mención en diversas ocasiones al Ciudadano Jorge Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.

Bajo este contexto, en los elementos que integran el expediente materia del presente dictamen se advierte que se acredita la calidad del Ciudadano Jorge Luis Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, lo cual se advierte en la copia certificada del oficio número IEE/DPPM/457/04 de fecha nueve de julio de dos mil cuatro signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado, la copia certificada del formato número "XVI" de fecha catorce de enero de dos mil cinco y la copia certificada del formato número "XVII" de fecha catorce de enero de dos mil cinco.

En efecto, aún cuando de la información proporcionada por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación se acredita la calidad del Ciudadano Jorge Luis Mendoza Velarde como Secretario de Administración y

Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, con ello no se puede concluir la existencia de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho.

De los anteriores medios se puede concluir lo siguiente:

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA	CONTESTACIÓN	CONCLUSIÓN
<p><i>Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i></p>			
Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado	Informara sobre la existencia de algún registro a nombre de los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad, así como el domicilio que conste en dicho registro para determinar la ubicación de las personas en mención.	El artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que dicho Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por el Código de la materia y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de Juez competente, por lo que considerando que la información que solicita el Instituto Electoral del Estado de Puebla será utilizada para que atienda la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional relacionada con presuntas violaciones del Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en consecuencia no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estricto apego a los principios de certeza y legalidad que rigen las actividades del Instituto Federal Electoral, tal y como los dispone el	No puede ubicarse a Kamel Nacif Borges y Amin Farjat o Farjad y solicitar su colaboración al respecto.

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA	CONTESTACIÓN	CONCLUSIÓN
		artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra legalmente impedida para proporcionar al Instituto Electoral del Estado la información que requiere.	
Jefe del Servicio de Administración Tributaria	Informara sobre las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.	El Servicio de Administración Tributaria, se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información que solicita.	No se puede verificar si existió alguna operación sobre un volumen de camisas aportadas al Partido Revolucionario Institucional o alguno de sus funcionarios para comprobar la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.
Secretario de Hacienda y Crédito Público	Informara respecto a las empresas en las que los C.C. Kamel Nacif Borge y Amin Farjat o Amin Farjad aparezcan indistintamente como propietarios, socios o representantes legales, así como las actividades económicas de dichas empresas durante el periodo comprendido del mes de agosto del año dos mil cuatro a la fecha.	Legalmente no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de no satisfacerse los supuestos de excepción previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria, se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69 del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información que solicita.	No se puede verificar si existió alguna operación sobre un volumen de camisas aportadas al Partido Revolucionario Institucional o alguno de sus funcionarios para comprobar la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA	CONTESTACIÓN	CONCLUSIÓN
<p><i>Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</i></p>			
Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla	Solicitar a la estación radiofónica W Radio que informara a este Organismo Electoral si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que en caso de contar con la información en referencia se le solicitara indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.	Dicha Dependencia del Ejecutivo federal no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión.	No se puede obtener la grabación transmitida en la estación W Radio y la forma en la cual se obtuvo.
Director de W Radio	Informara si cuenta en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la grabación en la cual se escuchan las voces del C. Kamel Nacif Borge hablando con algún empleado sobre unas playeras que tenían y que supuestamente las iban a ocupar en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado de Puebla en el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro, así como de contar con la información solicitada indicara la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.		Aun cuando aportara la grabación de mérito no se tendría certeza respecto a los hechos contenidos en la citada grabación y que la misma hubiese sido obtenida apegada a los dispuesto por el aludido artículo 16 constitucional, ya que como se advierte de las notas periodísticas aportadas por el promovente, documentales privadas que ya han sido valoradas por este Órgano Auxiliar, no se aportan elementos que robustezcan el dicho del denunciante.
Director General del Periódico Digital e-consulta	Comunicara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "Exhorta Congreso al IEE para investigar apoyo de Kamel a MMT" publicada en el sitio www.e-puebla.com o www.e-consulta.com en fecha veintiuno de septiembre de dos mil seis, en la cual se		Aun cuando aportara la grabación de mérito no se tendría certeza respecto a los hechos contenidos en la citada grabación y que la misma hubiese sido obtenida apegada a los dispuesto por el aludido

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA	CONTESTACIÓN	CONCLUSIÓN
	menciona que durante la campaña como candidato al Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Mario Marín Torres recibió un financiamiento privado de 4 millones de pesos, de los cuales 1.5 millones de pesos fueron aportados en especie por Kamel Nacif Borge. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.		artículo 16 constitucional, ya que como se advierte de las notas periodísticas aportadas por el promovente, documentales privadas que ya han sido valoradas por este Órgano Auxiliar, no se aportan elementos que robustezcan el dicho del denunciante.
Directores Generales del Periódico Digital La Quinta Columna	Informaran si contaban en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "Kamel Nacif apoyó campaña de Marín" publicada por el periódico La Quinta Columna en el sitio www.laquintacolumna.com.mx/2006/septiembre/politica/pol_190906_ef_audios_kamel_marin_campana.html , sin fecha de publicación, en la cual Efraín Núñez hace referencia de dos grabaciones en las cuales se involucran nombres de personas que supuestamente intervienen en la donación de más de sesenta mil camisas de la empresa del C. Kamel Nacif a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura de Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.		Aun cuando aportara la grabación de mérito no se tendría certeza respecto a los hechos contenidos en la citada grabación y que la misma hubiese sido obtenida apegada a los dispuesto por el aludido artículo 16 constitucional, ya que como se advierte de las notas periodísticas aportadas por el promovente, documentales privadas que ya han sido valoradas por este Órgano Auxiliar, no se aportan elementos que robustezcan el dicho del denunciante.
Director de la Jornada de Oriente	Informara si contaba en su archivo con las grabaciones u otros elementos relacionados con la nota periodística "EL IEE podría desechar la investigación sobre las donaciones de Kamel a Marín" publicada por la Jornada de Oriente en la dirección www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/10/25/puebla/pol103.php de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, escrita por Lesly Mellado May en la que se refiere que en el noticiero W Radio que conduce la periodista Carmen Aristegui se difundió la conversación de Kamel Nacif con uno de sus empleados en donde se menciona la supuesta aportación de sesenta mil camisas a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional a Gobernador del Estado durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario del año dos mil cuatro. Asimismo, que de contar con la información solicitada indicará la forma o medios a través de los cuales obtuvo la misma.		Aun cuando aportara la grabación de mérito no se tendría certeza respecto a los hechos contenidos en la citada grabación y que la misma hubiese sido obtenida apegada a los dispuesto por el aludido artículo 16 constitucional, ya que como se advierte de las notas periodísticas aportadas por el promovente, documentales privadas que ya han sido valoradas por este Órgano Auxiliar, no se aportan elementos que robustezcan el dicho del denunciante.
Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación de este Organismo Electoral	Informara si el Ciudadano Salvador Mendoza tiene el carácter de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional y estuvo acreditado como encargado de la administración de los recursos de dicho partido político ante este Organismo Electoral y remitiera el informe justificatorio y sus anexos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto del Proceso Electoral Estatal Ordinario del	La documentación soporte del Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, correspondiente al candidato a Gobernador Mario Plutarco Marín Torres la misma fue devuelta al ente político en cuestión, en términos de lo dispuesto por el diverso 23 del Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto	Se acredita la calidad del Ciudadano Jorge Luis Mendoza Velarde como Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, con ello no se puede concluir la existencia de la supuesta aportación del C. Kamel Nacif Borge a la campaña del Partido Revolucionario Institucional

AUTORIDAD	INFORMACIÓN SOLICITADA	CONTESTACIÓN	CONCLUSIÓN
	año dos mil cuatro, en específico el correspondiente al candidato a Gobernador del Estado de Puebla.	Electoral del Estado, vigente al momento de concluir el procedimiento de fiscalización conducente, además informó que en los archivos de dicha Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que el Ciudadano Salvador Mendoza ha ostentado el cargo de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.	y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro como lo señala el promovente en su escrito, dejando solo una presunción respecto de su dicho.

C. MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ahora bien, aún cuando el denunciado no presentó algún medio de prueba para desvirtuar lo señalado por el Partido Acción Nacional, opera a favor de éste la presunción de inocencia, sin verse el denunciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo.

En efecto, la duda absolutoria es un principio normativo vigente en el derecho electoral mexicano, pues la presunción se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, por ello sólo la prueba fehaciente y suficiente es capaz de otorgar la certeza necesaria para revertir la presunción de inocencia.

Bajo este contexto, la presunción de inocencia del inculpado deberá ser respetada por la autoridad y destruirla, a través de elementos de convicción que no dejen duda respecto de la responsabilidad del infractor, y que las consideraciones sobre valoración de las pruebas queda sujeta a lo que en específico prevea la ley a aplicar y generalmente, a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, motivando su apreciación en cada caso. Así pues, la destrucción de la presunción de inocencia, supone la certeza sobre la responsabilidad de un sujeto, lo cual sólo es posible lograr a través de medios de pruebas que de manera objetiva evidencien la participación plena del sujeto en los hechos ilícitos que se denuncian, y no así en indicios o conjeturas que carezcan de la fuerza suficiente para desvirtuarla.

Así, este Órgano Auxiliar considera que de emitir un fallo condenatorio este debe de tener como premisa esencial la existencia de medios de convicción indubitables, en cuya preparación y desahogo se hayan observado a cabalidad las formalidades esenciales del procedimiento, sustentada sobre todo en elementos de pruebas allegados al procedimiento, que sujetos al juicio valorativo respectivo

resulten aptos y contundentes para dar plena convicción de que efectivamente el partido político infringió la normatividad electoral.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios relevantes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales señalan:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—

De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Revista *Justicia Electoral* 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 121, Sala Superior, tesis S3EL 059/2001.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 790-791.”

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—

La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de

desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el *onus probandi*, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Sala Superior, tesis S3EL 017/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 791-793."

Ahora bien, una vez que ha sido debidamente estudiadas y valoradas las probanzas aportadas por el denunciante en el presente asunto, se considera que con las mismas no se genera la convicción de que el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro hayan recibido aportaciones del C. Kamel Nacif Borge incumpliendo con ello con lo dispuesto por los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Lo anterior, en virtud de que al no existir elementos de prueba suficientes que permitan concluir de forma cierta, no solo la existencia del hecho denunciado sino también la participación que en él tuvo el denunciado.

En esa tesitura, de la adminiculación de las pruebas presentadas por el denunciante, los elementos obtenidos por este Órgano Auxiliar en ejercicio de su facultad investigadora y las argumentaciones efectuadas por el denunciado esta autoridad considera que se puede arribar a las siguientes conclusiones:

- 1.- Que no se acredita que la grabación que anexa el Partido Acción Nacional a la denuncia materia del presente dictamen fuera obtenida con apego a las disposiciones constitucionales, ya que no cuenta con los elementos probatorios que acrediten tal hecho, por lo tanto carece de todo valor probatorio.

2.- Que de las notas periodísticas aportadas por el denunciante solo se puede demostrar que la noticia sobre la transmisión de una grabación donde supuestamente Kamel Nacif Borge habla sobre la campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional en el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro fue difundida en el noticiero de la periodista Carmen Aristegui en W-Radio, más no que los hechos a que se refieren hubieren acontecido en los términos que se sostienen en las mismas.

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5.- Que no existe relación laboral ente Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta.

6.- Que no existe algún nexo entre Kamel Nacif Borge y Amin Fajard Nasta dentro de las sociedades en las cuales participa Kamel Nacif Borge.

7.- Que de la información proporcionada por las diversas autoridades después de adminicular dichas probanzas no se acredita la existencia de las supuestas aportaciones del C. Kamel Nacif Borge al Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro.

8.- Que de los documentos aportados por el denunciante relativos a los formatos XVI y XVII, así como el informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación y su correspondiente dictamen emitido por la Comisión Revisora de la Aplicación de los Regímenes de Financiamiento de los Partidos Políticos, se advierte que la documentación comprobatoria presentada por dicho partido político se encontraba de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Reglamento para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados o registrados ante el Instituto Electoral del Estado, salvo algunas irregularidades que consistían en la omisión técnica de la falta de firma del candidato en algunos de los informes y conciliaciones presentados, entre los que no se encuentra el del candidato a Gobernador del Estado.

Sobre esta base, esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias llegó a las anteriores conclusiones en el ejercicio de su facultad de investigación y tomando en consideración los límites previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal en el ejercicio de las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba para esclarecer los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional, esto es tomó en consideración los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Ahora bien, aún cuando en el ejercicio de su facultad de investigación este Órgano Auxiliar puede allegarse de los elementos necesarios esta autoridad administrativa no cuenta con la facultad para asumir el gravamen o la carga procesal que le corresponde al promovente, en el presente caso al Partido Acción Nacional, pues tal como se establece en el procedimiento contemplado en el Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado en la interposición de una denuncia se debe de cumplir con el requisito de ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo establecido para ello, indicándose al respecto la excepción de que esta Comisión deberá de requerir aquellas que el promovente justifique que aunque fueron solicitadas oportunamente por escrito al órgano competente, no le fueron entregadas. Lo cual denota que en ningún momento esta Autoridad puede suplir la obligación procesal que le corresponde al Partido Acción Nacional, sin que por ello se falte al principio de exhaustividad.

Resulta aplicable al caso el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente identificado con el número SUP-JRC-349/2001 y su acumulado SUP-JRC-350/2001, el cual señala:

“...

f) En la interposición del recurso de queja se debe cumplir con el requisito de ofrecer y aportar las pruebas, dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley, debiendo precisar el recurrente aquellas que deban requerirse, siempre y cuando justifique que, habiéndolas solicitado oportunamente por escrito al órgano competente, no le fueron entregadas, y

g) Los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados por el órgano jurisdiccional, atendiendo a las regla de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en el entendido de que las documentales privadas, las pruebas técnicas, la instrumental de actuaciones, las presunciones y los demás elementos que obren en el expediente, incluidas las afirmaciones de las partes, sólo harán prueba plena, cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano competente.

En la especie, la coalición ahora enjuiciante alega que la autoridad responsable no requirió a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas, cierta información que serviría para perfeccionar pruebas técnicas ofrecidas en el recurso de queja. Para dilucidar si le asiste la razón al ahora promovente, es necesario advertir que

el Tribunal Electoral del Estado sólo estaba obligado a obsequiar la solicitud del recurrente de requerir ciertas probanzas (específicamente, cierta información a la citada Dirección de Comunicación Social y al Instituto Estatal Electoral), según se dispone en el artículo 13, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, en el caso en que el entonces quejoso cumpliera con las siguientes cargas procesales concretas: a) Mencionar, en su recurso, las pruebas que deben requerirse; b) Acreditar o justificar que se solicitaron oportunamente por escrito al órgano competente y que no fueron entregadas. Sin embargo, en el presente asunto, es el caso que el promovente no acredita el cumplimiento de esas obligaciones procesales, por lo que se estima inoperante su agravio específico.

En este tenor, ha sido criterio de esta Sala Superior que el promovente que no acredite que haya solicitado oportunamente por escrito a las autoridades competentes, cierta información o documentación que obre en su poder y que éstas no se la haya entregado, la consecuencia, de acuerdo con la ley electoral de Chiapas, debe ser que el órgano jurisdiccional electoral no tenga la obligación de requerir lo solicitado por el promovente, resultando aplicable el criterio sostenido por esta Sala Superior en el expediente SUP-JRC-319/2001, resuelto en sesión pública el veintidós de diciembre del año en curso.
“...”

De igual forma, sirve de sustento el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente identificado con el número SUP-JRC-481/2004, el cual refiere:

“...
Con lo anterior está claro que la autoridad jurisdiccional no tenía por qué hacerse cargo de un gravamen o carga procesal que legalmente corría a cargo del partido político, en forma tal que no se faltó al principio de exhaustividad ni el mismo presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla tenía por qué ordenar que se llevara a cabo el desahogo o perfeccionamiento de alguna prueba, mucho menos de requerir informe o documento alguno al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto en el artículo 339, fracciones XI y XII, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Ciertamente, para corroborar la pertinencia de la anterior conclusión debe tenerse presente que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 356; 357, párrafo segundo, y 361, fracción IV, del código invocado, el que afirma está obligado a probar; las pruebas deben ser ofrecidas y, por ende, aportadas, al presentarse el recurso, y en tal escrito se deben precisar las pruebas que se ofrecen, su relación con los hechos y las que deban requerirse, cuando se justifique que, a pesar de haberlas solicitado oportunamente y con las formalidades necesarias, no se entregaron. Esto es, si el partido promovente afirmó que se habían actualizado ciertas irregularidades que vulneraban principios constitucionales y legales y, en aplicación de la causa abstracta de nulidad de elección, debía decretarse la nulidad de la elección de Gobernador del Estado, y ofreció las denuncias, sus alcances y sus anexos probatorios, entonces, él tenía dicho gravamen procesal y la responsable no tenía que asumir esa carga, sobre todo porque no se habían actualizado los extremos para su requerimiento.

Además, debe tenerse presente que en beneficio de los principios de imparcialidad, certeza y objetividad, el órgano jurisdiccional no puede suplir cargas probatorias o actuar oficiosamente, ni liberar de obligaciones procesales a las partes. Es decir, si una parte no realiza las actuaciones que posibiliten la concreción de un supuesto legal (requerimiento de probanzas), no se debe romper el equilibrio procesal entre las partes, en detrimento de los terceros interesados, por indebidamente subsanar actitudes omisas que se partan del marco legal.

En este sentido, también es inconcuso que las diligencias para mejor proveer (como las previstas en las disposiciones jurídicas locales ya señaladas) son una especie de facultad

potestativa del juzgador. De esta suerte, el hecho de que no se decrete su realización, de ninguna forma irroga perjuicio a las partes. Sin embargo, aunque dichas diligencias son una facultad potestativa del Tribunal Electoral, atendiendo al principio de legalidad, en su vertiente de fundamentación y motivación [en términos de lo prescrito en los artículos 41, párrafo segundo, fracción III, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución federal], la autoridad jurisdiccional electoral que tenga reconocida legalmente esas atribuciones, no sólo está obligada a citar las disposiciones jurídicas en que se apoya la diligencia, sino a expresar las razones claras, evidentes y suficientes que justifiquen la diligencia, puesto que no basta con señalar que la diligencia no obsta para la resolución de los recursos dentro de los plazos legales y que el asunto así lo requiera, para su decretamiento, sino que sería necesario, por ejemplo, evidenciar y expresar que no se cuenta con elementos probatorios suficientemente ilustrativos para dirimir una contienda y que sean, por ejemplo, de aquellos que la autoridad responsable omita allegar y de cuyo contenido se ministre información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, siempre que ello no obedezca, desde luego y como sucede en este asunto, a una deficiencia procesal del promovente o la inobservancia de una obligación procesal, como sucede con el incumplimiento de una carga probatoria. Para ilustrar lo anterior, es conveniente citar las tesis de jurisprudencia subsecuentes que aparecen publicada en las páginas 73 a 75 de la compilación oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denominada *Jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002*:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER.

Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado información, naturalmente, relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo, debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable, omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse, pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/97.—Partido Acción Nacional.—25 de septiembre de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-061/97.—Coalición Democrática, integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por la organización denominada "El Barzón".—25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-082/97.—Partido de la Revolución Democrática. 25 de septiembre de 1997.—Unanimidad de votos.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR. El hecho de que la autoridad responsable no haya ordenado la práctica de diligencias para mejor proveer en la controversia que le fue planteada, no puede irrogar un perjuicio reparable por este tribunal, en tanto que ello es una facultad potestativa del órgano resolutor, cuando considere que en autos no se encuentran elementos suficientes para resolver. Por tanto, si un tribunal no manda practicar dichas diligencias, ello no puede considerarse como una afectación al derecho de defensa de los promoventes de un medio de impugnación, al constituir una facultad potestativa de la autoridad que conoce de un conflicto.

Tercera Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97. Partido Revolucionario Institucional. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-039/99. Partido Revolucionario Institucional. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-057/99. Partido de la Revolución Democrática. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

De acuerdo con todo lo anterior, si el promovente, desde el recurso de inconformidad, incumplió con su carga procesal de acreditar que al Instituto Electoral del Estado de Puebla había solicitado la remisión de las copias certificadas u originales de las denuncias, sus alcances y anexos probatorios, entonces, es inconcuso que resulte irrelevante el que el promovente especificara la autoridad ante la cual se habían presentado las denuncias y los elementos de prueba y que supuestamente los originales obraran en poder de la "autoridad originalmente responsable". Además, tampoco el promovente en el presente juicio de revisión constitucional electoral evidencia que estuviere material y legalmente impedido para proporcionar las pruebas originales que fueron aportadas con las denuncias, ya que pudo haber solicitado, como se razonó párrafo arriba por esta Sala Superior, que se remitieran las copias certificadas u originales (en este caso, una vez que se dejara copia certificada en el expediente administrativo) al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

En este mismo sentido, no era fundamento bastante, en el sentido que pretende el promovente, lo previsto en los artículos 5° y 268 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, ya que de acuerdo con una interpretación sistemática y funcional, los supuestos en que se actualiza la obligación para las autoridades federales, estatales y municipales de remitir información que obra en su poder y esté relacionada con el proceso electoral, certificar hechos o documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral; prestar el apoyo necesario para practicar las diligencias que le sean requeridas para fines electorales, e informar de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones, no pueden ser entendidos como elementos jurídicos que eximan o releven a las partes, en un proceso jurisdiccional, de sus obligaciones o cargas probatorias, pues se rompería el equilibrio e igualdad de oportunidades en el contencioso electoral. Esto es, bastaría que un partido político o una coalición invocara lo dispuesto en dichos preceptos, así como lo previsto en el artículo 339, fracciones XI y XII, del ordenamiento de referencia, para que la autoridad procediera a aportar todas las pruebas que estimara conducentes el actor, con independencia de que justificara que las había solicitado, en tiempo y forma, y que no se hubiere atendido su solicitud, lo cual relevaría al actor de sus obligaciones procesales que van en beneficio de su propio interés para trasladar esa responsabilidad a la autoridad jurisdiccional que por antonomasia debe ser un tercero ajeno a la litis e imparcial. De esta manera, debe rechazarse la proposición del actor por conducir a una vulneración del derecho a la administración de justicia.

No es obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se disponga que se considera información reservada, esto es, información pública cuyo

acceso es restringido, precisamente a los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, hasta que exista resolución administrativa o jurisdiccional definitiva y ejecutoriada, porque se trata de información que consta en documentos que el propio promovente dice que aportó en los procedimientos administrativos sancionadores respectivos, lo cual hace suponer que está enterado de su contenido y no haría un uso indebido de esa información y, por lo que respecta a los candidatos, dirigentes y simpatizantes, así como los partidos políticos que estuvieran involucrados como presuntos infractores, a partir de los datos que se desprendieran de la información contenida en las documentales precisadas, también está justificado su conocimiento de esa información por estos sujetos, ya que se trata de las contrapartes o de sujetos que eventualmente tendrían esa calidad en relación con el partido político denunciante, por lo cual de todas formas tendrían acceso a la misma.

Además, como se estableció en párrafos precedentes, el actor tendría la posibilidad de solicitar al Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Puebla que, en atención a lo dispuesto en dicha fracción VI del artículo 12 de la ley de referencia, remitiera directamente las copias certificadas de la documentación solicitada al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Esto tampoco ocurrió en la especie y por eso, entre otras razones que ya se establecieron, no cabría admitir que el actor en este juicio de revisión constitucional electoral estuviera impedido material o jurídicamente para cumplir con una carga probatoria.

...

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en el ejercicio de la facultad de investigación se pueden efectuar diligencias para mejor proveer, el hecho de que no se ejerciten las mismas atendiendo a los principios contemplados en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal no irroga una afectación al derecho de defensa de los promoventes pues se trata únicamente de una facultad potestativa más no obligatoria de esta Autoridad, la cual se considera tomando en cuenta la existencia de elementos suficientes para resolver el asunto materia del presente dictamen.

En efecto, como ha sido señalado con anterioridad la investigación que esta Comisión efectúa al conocer un hecho que puede ser violatorio de las disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla debe dirigirse en primer lugar, a corroborar los indicios que se desprendan de los elementos de prueba aportados por el denunciante como en este caso la grabación aportada por el Partido Acción Nacional, allegándose de las pruebas idóneas, necesarias y proporcionales para verificarlos o desvanecerlos, y establecer si la versión planteada en la denuncia se encuentra o no suficientemente sustentada para considerar probables los hechos de que se trate.

En caso de que el resultado de estas primeras investigaciones no arrojen la verificación de hecho alguno, ni avance algo en ese sentido, o bien obtengan elementos que desvanezcan o destruyan los principios de prueba que aportó el denunciante, sin generar nuevos indicios relacionados con la materia de la denuncia, se justifica que esta Autoridad Administrativa no instrumente más diligencias tendientes a generar otros principios de prueba, en relación con esos u otros hechos, pues la base de su actuación radica precisamente en la existencia

de indicios derivados de los elementos probatorios inicialmente aportados, y de la existencia de las personas y cosas relacionadas con éstos.

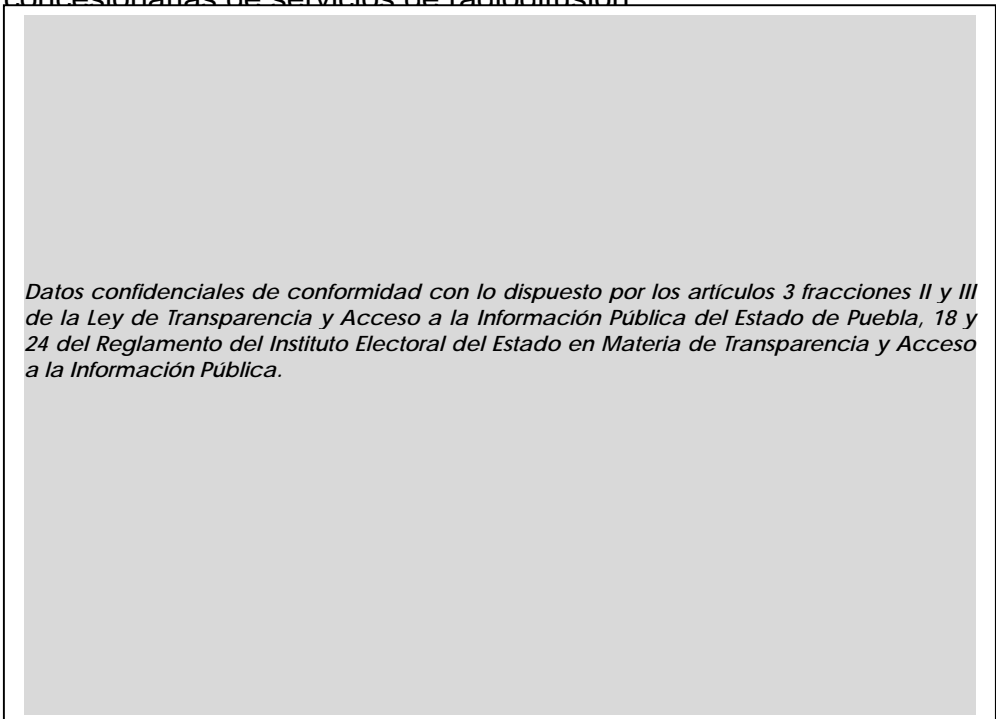
Situación que en la especie acontece, pues de las probanzas aportadas por el Partido Acción Nacional no se obtuvieron elementos que generaran la convicción de que los hechos denunciados acontecieran como lo planteo dicho instituto político o se obtuviesen elementos que permitieran generar nuevos indicios al respecto, aunado a que la grabación aportada como medio de prueba carece de todo valor probatorio en términos del artículo 16 párrafos noveno y décimo de la Constitución Federal.

Esto es así, pues este Órgano Auxiliar tomo en cuenta para el análisis de la denuncia materia del presente dictamen los siguientes elementos:

- Las pruebas aportadas por el promovente consistentes en:
 - Un audio casete;
 - Tres notas periodísticas;
 - Copia certificada del oficio número IEE/DPPM/457/04 de fecha nueve de julio de dos mil cuatro signado por la Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación del Instituto Electoral del Estado;
 - Copia certificada del formato número “XVI” de fecha catorce de enero de dos mil cinco;
 - Copia certificada del formato número “XVII” de fecha catorce de enero de dos mil cinco;
 - Copia certificada del informe de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación derivado del examen al Informe de gastos de campañas, el cual incluye el origen y destino de la ministración bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto, así como del financiamiento privado del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, identificado con el número DPPM/INF-CAMPAÑA-PRI/05; y
 - Copia certificada del “Dictamen de la Comisión Revisora, en relación con el informe de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo General de este Organismo, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto correspondiente al Proceso Estatal Electoral Ordinario 2004”.

Las cuales fueron insuficientes para demostrar el dicho del denunciado respecto a que el Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Gobernador del Estado de Puebla Mario Plutarco Marín Torres durante el desarrollo del Proceso Electoral

Estatutario Ordinario dos mil cuatro hayan recibido aportaciones del C. Kamel Nacif Borge incumpliendo con ello con lo dispuesto por los artículos 48, 49 fracción VII, 52 bis apartado B fracción III y 54 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

- Las contestaciones de:
 - El Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Puebla, Ingeniero Daniel Ortiz y Caso, en donde manifestó que dicha Dependencia del Ejecutivo federal no cuenta con las facultades para requerir la información solicitada a las empresas concesionarias de servicios de radiodifusión
 - 

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 - El Subadministrador de Apoyo Técnico Jurídico para la Aplicación de la Normatividad del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Enrique Olvera Flores, el cual manifestó que legalmente no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de no satisfacerse los supuestos de excepción previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación.
 - El Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado, Ingeniero José Octavio Muñoz Reyes, donde manifestó

que el artículo 135, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en que dicho Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por el Código de la materia y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de Juez competente, por lo que considerando que la información que solicita el Instituto Electoral del Estado de Puebla será utilizada para que atienda la solicitud de investigación presentada por el Partido Acción Nacional relacionada con presuntas violaciones del Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en consecuencia no se encuentra dentro de la hipótesis prevista en los artículos 83, párrafo 1, inciso m) y 89, párrafo 1, inciso f) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 240 y 241 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estricto apego a los principios de certeza y legalidad que rigen las actividades del Instituto Federal Electoral, tal y como los dispone el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra legalmente impedida para proporcionar al Instituto Electoral del Estado la información que requiere.

- El Administrador Central de la Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria, Licenciado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, en la cual manifestó que el Servicio de Administración Tributaria, se encuentra impedido legalmente para proporcionar la información toda vez que se encuentra clasificada como reservada, en virtud de que se trata de datos protegidos por el secreto fiscal, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que señala que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Por lo anterior, y considerando que la petición no se ubica en ninguna de las excepciones a la reserva legal que establece el citado artículo 69

del Código en mención, se reitera la imposibilidad legal para proporcionar información que solicita.

○

Datos confidenciales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, 18 y 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- La Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación que informó que la documentación soporte del Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral Estatal Ordinario dos mil cuatro, correspondiente al candidato a Gobernador Mario Plutarco Marín Torres la misma fue devuelta al ente político en cuestión, en términos de lo dispuesto por el diverso 23 del Reglamento para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, vigente al momento de concluir el procedimiento de fiscalización conducente, además informó que en los archivos de dicha Dirección no obra documento alguno del que se desprenda que el Ciudadano Salvador Mendoza ha ostentado el cargo de Secretario o Encargado de las Finanzas del Partido Revolucionario Institucional.
- La inexistencia de otros elementos de prueba que permitan adminicular las pruebas para demostrar el dicho del promovente.

Por tal motivo, al no haberse visto satisfecha por el denunciante la carga de la prueba a que hace referencia el numeral 24 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, se determina tener por infundados los agravios esgrimidos por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, Atendiendo a que de los elementos de prueba aportados por el promovente, de las diligencias llevas a cabo por este Órgano Auxiliar, de todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente y de la adminiculación de cada uno de estos, no se acredito los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional.

5.- Que, en atención a lo señalado en el artículo 33 del Reglamento para la Tramitación de Denuncias Interpuestas por los Partidos Políticos y/o Coaliciones Acreditados o Registrados ante el Instituto Electoral del Estado, los dictámenes que elabore la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias se someterán a la consideración del Consejo General de este Organismo para la emisión de la resolución correspondiente; en tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 10 fracción VI del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Consejera Presidenta de esta Comisión deberá remitir al Consejero Presidente del Órgano Superior de Dirección de este Instituto, el presente dictamen, para que por su conducto, sea sometido al conocimiento del citado Órgano Central y el mismo esté en posibilidad de dictar la resolución correspondiente.

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias del Instituto Electoral del Estado emite el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias es competente para conocer, tramitar y emitir el presente dictamen, en términos de lo estipulado en el considerando número 1 de este documento.

SEGUNDO.- Este Órgano Auxiliar determina que las partes tienen personería para actuar en la presente litis, de conformidad con lo establecido en el considerando 2 del presente dictamen.

TERCERO.- Esta Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias determina declarar infundados los agravios esgrimidos por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Organismo Electoral, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de los considerandos 3 y 4 de este documento.

CUARTO.- Sométase a la consideración del Pleno del Consejo General de este Instituto el presente dictamen, para que dicte la resolución conducente, de conformidad a lo dispuesto en el considerando 5 del presente instrumento.

El presente dictamen fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la referida Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, en sesión ordinaria de fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho.

PRESIDENTA

SECRETARIO

**MTRA. ROSALBA VELÁZQUEZ
PEÑARRIETA
CONSEJERA ELECTORAL**

**MTRO. JOSÉ JOEL PAREDES OLGUÍN
CONSEJERO ELECTORAL**

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

**LIC. MIGUEL DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ
CONSEJERO ELECTORAL**

**LIC. PAUL MONTERROSAS ROMÁN
CONSEJERO ELECTORAL**